



UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

CARRERA ABOGACIA

TESIS DE GRADO

TEMA:

**"ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LA FISCALIA DE ASUNTOS
INDIGENAS COMO PARTE DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE
COTOPAXI CON SEDE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA".**

Tesis presentada previa a la obtención del Título de Abogado de los Tribunales del Ecuador

Autor:

Aulestia Amores Luis Miguel

Director:

Dr. David Moreano

Latacunga - Ecuador

2009

AUTORIA

Los criterios emitidos en el presente trabajo de investigación "ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LA FISCALIA DE ASUNTOS INDIGENAS COMO PARTE DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI CON SEDE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA", son de exclusiva responsabilidad del autor.

Aulestia Amores Luis Miguel
C.I.0501871198-8

AGRADECIMIENTO

Sea esta la oportunidad para agradecer:

A Dios por haber guiado mi camino de sabiduría.

A la Universidad Técnica de Cotopaxi, y a sus distinguidos Docentes, por haberme brindado la oportunidad, de pertenecer a tan digna institución, y ser el lumbral de enseñanza para poder continuar con mi preparación profesional con valores éticos y morales para defender los Derechos de quienes han sido vulnerados y buscar que la justicia se aplicada en forma equitativa e imparcial.

Al Sr. Director de Tesis y al amigo profesional de Investigación, quienes con alta experiencia, y sus conocimientos me ha guiado en el desarrollo de la presente tesis.

A mis amigos de aula que a lo largo de esta preparación siempre me han apoyado con sus consejos, conocimientos y experiencias para continuar adelante.

DEDICATORIA

A mi esposa Mónica Mariela y a mis hijos Alison Anabel y Christian Miguel, por ser la razón principal para seguir adelante; por la comprensión, paciencia y apoyo que siempre me han demostrado en los momentos más difíciles, impulsándome a continuar en el camino de superación profesional.

A mi Madre, por el apoyo que me ha ofrecido y por el ejemplo de sabiduría y paciencia.

INDICE

Contenido	Pag.
Carátula	i
Autoría	ii
Agradecimiento	iii
Dedicatoria	iv
Índice General	v
Resumen	vii
Introducción	x

CAPITULO I

1.1	Fundamentos Teóricos	1
1.2	Marco Conceptual	46

CAPITULO II

2.1	Caracterización del objeto de estudio	49
2.2	Análisis e interpretación de resultados	50
2.3	Análisis e interpretación de encuestas	51
2.4	Conclusiones y Recomendaciones	63

CAPITULO III

3.1	Propuesta	66
3.2	Objetivo General	66
3.3	Objetivos Específicos	66
3.4	Justificación	67

3.5	Fundamentación Teórica	67
3.5.1	Administración de Justicia	69
3.5.2	Linchamiento, Justicia por mano propia	74
3.5.3	Fiscales de asuntos Indígenas	75
3.5.4	La Justicia Indígena	75
3.5.5	Por qué existe la Justicia Indígena	76
3.5.6	Problemas con la Justicia Indígena	77
3.5.7	Qué implica la Justicia Indígena	78
3.6	Manual de Atribuciones de la Fiscalía Indígena	78
	Bibliografía	94
	Anexos	96

TEMA: "ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LA FISCALIA DE ASUNTOS INDIGENAS COMO PARTE DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI CON SEDE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA".

Autor: Aulestia Amores Luis Miguel

RESUMEN

El presente trabajo es el producto de la investigación para determinar las atribuciones específicas de la Fiscalía de asuntos Indígenas como parte de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi con sede en la ciudad de Latacunga. La propuesta de determinar las atribuciones específicas de la Fiscalía de asuntos Indígena contiene múltiples referencias a una aplicación de la Justicia Indígena, respetando los Derechos Humanos de las personas, a fin de evitar que se apliquen torturas y se cometan linchamientos con la mal llamada justicia por la propia mano. Al respecto se establece un manual de atribuciones que busca determinar las funciones del Fiscal de asuntos Indígenas, cual es su rol frente a la Justicia Indígena y Justicia Ordinaria, buscando la solución de conflictos de una manera ágil y oportuna, ejerciendo justicia en forma imparcial y equitativa.

DESCRIPTORES:

JUSTICIA FISCALIA INDIGENA ATRIBUCIONES

YACHAYWA: “RUNAKUNAPAK IMA HAYÑIKUNA TIYASHKATA ALLICHINCKAPAK PAKTACHINKAPAKPASH COTOPAXI MARKA, LATACUNGA LLAKTAPIMI FISCALIANISHKA TIYAN”.

Shuti: Aulestia Amores Luis Miguel

TANTACHISHKA YUYAY

Kay llamkayka kanmi shuk taripayta rurashpa imashina runakunapak ima hayñikuna tiyashkata allichinkapak, paktachinkapakpash Cotopaxi marka Latacunga llaktapi Fiscalíanishka tiyashkata riksichin.

Ima ñanakunata paktachinkapakka chikan chikan ñankunami tiyan, chaymanta pi pushkkunapash achkata pachaka runakunapak kawsay minkay kamachiktami riksishpa katina kan, shina shamuk pachakunapi ama ima llakikunata charichun, wakinpika mana allí kamachikta riksishpaka llakiman utka chayanlla.

Chaymanta imashina tukuylaya llakikuna tiyashkata allichinchunka shuk sumak kamu allí ñanta charinktami rurashkani; shina runakunapak mishukunapak kamuwan chimpapurashpa riksishpa hatun pushakkunapash llakikunata utka, pakta pakta allí chichun.

RIKUCHIK:

ALLICHIK

RUNAKUNATA ALLICHIKWASI

IMA PAKTACHIKUNA

THEME: SPECIFIC POWERS OF ATTORNEY AS PART OF INDIAN PROVINCIAL PROSECUTOR'S OFFICE BASED COTOPAXI CITY OF LATACUNGA.

Autor: Aulestia Amores Luis Miguel

ABSTRAC

This work is the product of research to determine the specific functions of the Indian Office as part of the Provincial Prosecutor of Cotopaxi based in the city of Latacunga. The proposal to determine the specific duties of the Attorney Indigenous contains multiple references to an application of indigenous justice, respect for human rights of the person, in order to prevent the implementation of torture and lynching's committed misnamed justice into their own hand. In this connection provides a manual of authority that seeks to determine the functions of the Prosecutor Indian, what is your role against indigenous justice and ordinary justice, conflict resolution seeking a quick and timely manner, exercising justice impartially and fairly.

DESCRIPTORS:

JUSTICE INDIAN ATTORNEY. TERMS

INTRODUCCIÓN

El abuso y racismo hacia el pueblo indígena siempre ha existido desde tiempos remotos, es por eso que la Fundación para el Debido Proceso Legal, el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro de Estudios de Justicia y Participación (CEJIP) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) en una audiencia celebrada en el marco de 133 periodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han detectado que el Poder Judicial "no llega a todos los rincones del continente", y por eso es importante tratar de alcanzar el acceso igualitario a la Justicia en Latinoamérica .

Los organismos latinoamericanos, que buscan alcanzar el acceso igualitario a la justicia y evitar todo tipo de atropellos que eran víctimas los pueblos indígenas en nuestro país, se ha visto en la necesidad de crear un ente jurídico dando un paso agigantado con la creación de la Fiscalía Indígena como parte del Ministerio Público, ya que con esto se hará respetar los derechos constitucionales que han sido vulnerados en contra del pueblo indígena, accediendo a los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia, garantizando que no se violen los derechos de las personas, de las comunidades y se ejerza justicia en forma imparcial y equitativa.

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, promulgada el 20 de octubre del 2008, las Fiscalías de asuntos Indígenas, tienen por objeto dar viabilidad a la aplicación de la ley de acuerdo a lo establecido en el manual de justicia indígena, con el respeto de determinados parámetros.

Para el presente tema de investigación, se planteó los siguientes objetivos, siendo el general el siguiente:

- Determinar las atribuciones específicas que debe cumplir la Fiscalía Indígena como parte de la Fiscalía Provincial con sede en la Ciudad de Latacunga de acuerdo a su jurisdicción y competencia.

Los objetivos específicos que orientan el trabajo de investigación y que están relacionados con los capítulos de la Tesis serán los que se enuncian a continuación:

- Analizar las atribuciones que tiene el Fiscal Especial (indígena) como parte de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi con sede en la ciudad de Latacunga, determinando el alcance en la aplicación de la ley como un ente regulador, respetando los derechos humanos, aplicando principios constitucionales y todas las leyes que permitan reglar y aplicar las sanciones pertinentes en los delitos cometidos por miembros de una Comunidad Indígena.
- Diagnosticar la situación actual en que se encuentran las Comunidades Indígenas por el conflicto de leyes existentes entre la Ley Indígena y la Ley Ordinaria, estableciendo los principales conflictos que debe conocer el Fiscal indígena y ejercer justicia de acuerdo sus atribuciones.
- Determinar las atribuciones específicas del Fiscal Indígena para la aplicación de Leyes a las personas que cometen delitos y pertenecen a las diferentes comunidades indígenas.

Es necesario como base teórica describir las variables a) Controversia de las Leyes y b) Desconocimiento de las atribuciones específicas de la Fiscalía Indígena. Utilizando los métodos no experimentales realizados mediante preguntas científicas, utilizando la Investigación de carácter exploratoria-descriptiva.

De los objetivos previstos, fundamentados en las preguntas científicas que a continuación se describen:

- 1) Qué contenidos teóricos se puede utilizar para adquirir información sobre la aplicación de la ley en las comunidades indígenas?
- 2) Cuáles son los principales conflictos indígenas que debe conocer el Fiscal Indígena, a fin de determinar las atribuciones y ejercer justicia?; y,
- 3) Cómo se puede determinar las atribuciones del Fiscal Indígena como parte de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi con sede en la ciudad de Latacunga?.

Entre los métodos utilizados en la presente investigación tenemos: el método empírico, ya que contribuye a revelar y explicar las características fenomenológicas del objeto, se lo realizará utilizando herramientas principales como: el análisis documental, encuestas, entrevistas y observación entre otros; el método estadístico es indispensable ya que nos permitirá identificar los problemas obtenidos a través de resultados estadísticos aplicados a la investigación propuesta.

La presente investigación se la realizará en las comunidades indígenas pertenecientes a la Provincia de Cotopaxi, sujetos a la jurisdicción de la Fiscalía de asuntos Indígenas del cantón Latacunga. El universo de estudio esta constituido por la población indígena de Cotopaxi que es el 10.1% del total de la población indígena del Ecuador 830418; es decir 83872 indígenas en la provincia. De esto la muestra obtenida para la realización de encuestas será de 156, distribuidas en toda la jurisdicción de la Fiscalía Indígena del Cantón Latacunga.

Para su estudio, este trabajo consta de tres capítulos, divididos de la siguiente manera:

El primer Capítulo, contiene una base teórica que satisface el objetivo de responder a las variables propuestas.

El segundo Capítulo es el resultado de la aplicación de la investigación mediante los métodos y técnicas previstas en el proyecto; así como también ilustraciones mediante cuadros y gráficos.

El Tercer Capítulo abarca la solución al problema existente a través de una propuesta de fácil aplicación prevista en el tiempo y en el espacio.

Además contiene conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

CAPITULO I

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA DE ASUNTOS INDIGENAS

Antecedentes.

Los problemas de la violación a los derechos indígenas se han suscitado desde cuando se realizó la conquista española a América, que según la historia manifiesta que fue el inicio del cambio, siendo más bien el inicio de la esclavitud y el abuso por los conquistadores, ya que ellos con su imponentia y prepotismo han abusado y obligado a cambiar las costumbres de nuestro pueblo indígena, siendo objeto de maltratos y violaciones, llevando consigo la destrucción de la unidad familiar y la pérdida de una vida digna.

La práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, conocido como *Derecho Indígena*, son los conocimientos, normas y principios que han sido conservados y transmitidos de generación en generación en forma oral, no se ha buscado el reconocimiento por parte del Estado para su conservación, sino que ha sido suficiente la validación y la aplicación dada por nuestros pueblos; así como, no ha sido necesario escribirlos para que no desaparezcan, en su totalidad, el derecho indígena se encuentra en la memoria de cada uno de los miembros de un pueblo y nacionalidad.

Sin embargo, en la actualidad fue necesario, que los pueblos indígenas organizados luchan porque se incorporen sus derechos en la Constitución de la

República del Ecuador vigente, para ello cuenta la propuesta de un Estado Plurinacional.

Constitución de la República del Ecuador

Hacia la Constituyente de Montecristi. Los ecuatorianos eligieron a los miembros de una Asamblea para redactar una Constitución, una idea que se originó tras la caída de Gutiérrez.

La creación de este organismo se da luego de dos años y medio de discusiones y ofertas entre los representantes del poder político, pues la idea de su establecimiento surgió en abril del 2005, cuando el denominado grupo de los ‘forajidos’ participó en la jornada que determinó la caída del presidente Lucio Gutiérrez.

El grito “que se vayan todos”, de los ‘forajidos’ tenía relación con otro no proclamado que sugería “hagamos todo de nuevo.

Luego de poco más de un año, la primera vuelta de la campaña presidencial para suceder a Palacio se encendió y con ella la mayoría de aspirantes a Carondelet planteó el tema, entre ellos el candidato y hoy presidente Rafael Correa, quien sumó a esa iniciativa la negativa a elegir diputados.

Al ganar las elecciones y una vez posesionado, Correa promovió el llamado a consulta popular para que los ecuatorianos se pronuncien en torno a la instalación de una Constituyente, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución.

El Presidente envió la convocatoria a consulta popular para que el TSE agilice el proceso y también mandó una copia “informativa” al Congreso, cuya mayoría integrada por la Unión Demócrata Cristiana (UDC) y los partidos Social Cristiano (PSC), Sociedad Patriótica (PSP) y el Renovador Institucional (Prian) bloqueó la propuesta porque según dijeron, no cumplía con lo que especifica la Constitución.

En medio de esa crisis, el Ejecutivo logró romper una mayoría opositora en el TSE y con la dirimencia del presidente del organismo de aquel momento, Jorge Acosta, destituyó a 57 legisladores bajo el cargo de oponerse a la consulta popular.

Los suplentes de estos, asumieron y dieron paso al referéndum, que se cumplió el 15 de abril de 2008. Ahí, el 81,72% de la población apta para sufragar (5'354.595, según el Tribunal Supremo Electoral) votó por el sí a esa iniciativa.

Los integrantes de la Asamblea que se eligieron, debían en el cantón manabita de Montecristi, redactar la vigésima Constitución del país. Para lo cual tuvieron seis meses contados a partir del 15 de abril del 2008, con una opción de prórroga de 60 días.

El 20 de octubre del 2008, una vez promulgada la *Constitución* de la República del Ecuador; en su Art. 1, se reconoce que ***“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.***

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.

Es fundamental ya que por primera vez en la historia ecuatoriana el reconocimiento de lo pluricultural y lo multiétnico y que de manera implícita el Estado acepte que convivimos una gran diversidad de pueblos y nacionalidades cada una de ellas con sus riquezas, lengua propia, cultura, conocimientos y tradiciones.

En lo que concierne a la Administración de Justicia Indígena, hasta el año de 1998, se reconocía la existencia de un solo sistema de administración de justicia, ejercido por el Estado a través de la Función Judicial, desconociendo la existencia y vigencia de varios sistemas jurídicos en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

Para los pueblos y nacionalidades del Ecuador nuestro sistema de administración de justicia no se contrapone ni contraviene con las disposiciones de las leyes ordinarias, sino que se complementa con ellas y constituye una alternativa válida y eficiente. Para entender mejor este sistema, es necesario realizar una interpretación socio - cultural considerando las particularidades de los pueblos. En este sentido es importante considerar algunas experiencias como las suscitadas en Colombia, donde se ha logrado implementar la aplicación del sistema de administración de Justicia Indígena, a partir de fortalecer y respetar ciertos derechos que en Colombia se reconocen como los mínimos jurídicos, que es importante considerar para garantizar el respeto de aquellos derechos que se convertían en inviolables para los dos sistemas jurídicos.

El Ecuador hasta el año de 1998, era un Estado que reconocía al individuo como sujeto de derecho individual a partir de ese año, el Estado Ecuatoriano da un giro trascendental de gran importancia en cuanto se refiere al reconocimiento de derechos a favor de los diversos pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador al reconocer y garantizar los derechos colectivos.

La Constitución de la República del Ecuador, tomando en cuenta que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social como Plurinacional; consagró la jerarquización constitucional de la Justicia Indígena en el País, al señalar en el Art. 171 ***“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y***

que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en Instrumentos Internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.

Uno de los mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, es la creación de las Fiscalías Especiales o Fiscalías Indígenas; a fin de que quienes cumplan con estas funciones, sean las encargadas de vigilar que la justicia se aplique de acuerdo a lo que establece los preceptos jurídicos, respetando las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas; y, en caso de que los delitos cometidos por indígenas, por su gravedad no sean de competencia para las autoridades indígenas, el Fiscal Indígena, deberá poner en conocimiento de las Autoridades de la Justicia Ordinaria, para que continúe con su trámite respectivo.

De acuerdo a este enunciado se puede determinar los siguientes elementos que conforman la Justicia Indígena según el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador:

- Autoridad indígena;
- Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas;
- Funciones jurisdiccionales;
- Tradiciones ancestrales y derecho propio;
- Ámbito territorial;
- Participación y decisión de las mujeres;
- Normas y procedimientos Propios;
- Conflictos internos;
- La Constitucionalidad;

- La Protección de los derechos humanos;
- El respeto a las decisiones de la jurisdicción indígena por parte de la autoridad estatal;
- El rol de la Corte Constitucional; y,
- La necesidad de una ley secundaria de coordinación y cooperación.

Autoridades Indígenas:

Las **autoridades de los pueblos indígenas** son las personas encargadas de velar por el bienestar, la tranquilidad y la paz social en las respectivas comunidades o jurisdicciones. Estas autoridades son el Cabildo o el Consejo del Gobierno Comunitario, los mismos que están compuestos por: el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico; quienes con la Asamblea General resuelven los diversos conflictos que se presenten dentro de la comunidad indígena.

Estas autoridades están investidas de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Las autoridades indígenas son elegidas en las asambleas generales, y deben tener como requisitos básicos:

- Respeto y confianza de la comunidad;
- Capacidad;
- Honestidad;
- Imparcialidad;
- Sabiduría y merito moral para representar a la colectividad; y,
- Actuar como tal no solo en la solución de conflictos, sino en la dirección y desarrollo del territorio indígena.

Además, desde la experiencia comunitaria existen también personas muy respetadas que sin ser elegidas como Cabildos, se constituyen como autoridades para la comunidad, pueblo o nacionalidad; en este grupo están los líderes, padrinos, compadres, catequistas y ancianos quienes cumplen el papel de asesores

y consejeros en el proceso de solución de los distintos tipos y niveles de conflictos.

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas.

Las **comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas** son colectividades distintas y diferentes del resto de la sociedad ecuatoriana, para lo cual reúnen dos elementos muy importantes que son:

- Elemento material que está relacionado con los aspectos externos como son: la vestimenta, la lengua, los sistemas jurídicos, las costumbres, los ritos, las formas de organización y los sistemas económicos que rigen dentro de un territorio determinado.
- Elemento psicológico, que está relacionado con el aspecto psicológico, es decir, la convicción del colectivo humano de autodefinición de ser distinto al resto y pertenecer a un grupo diferente.

De acuerdo al Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, dice ***“Se reconoce y garantizará las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:***

- 1. Mantener y desarrollar libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.***
- 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.***

3. *El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.*
4. *Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.*
5. *Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.*
6. *Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.*
7. *La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Sino se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.*
8. *Consultar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.*
9. *Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus*

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y de la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de su enseñanza y aprendizaje.

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.

15. *Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.*
16. *Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.*
17. *Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.*
18. *Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.*
19. *Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.*
20. *La Limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.*
21. *Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.*
Los territorios de los pueblos en asilamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación

de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”.

Ante lo enunciado anteriormente, es claro observar las garantías que la Constitución de la República del Ecuador, brinda a los pueblos indígenas, y es por esto que ellos en base a sus costumbres y tradiciones aplican la justicia indígena como un principio consuetudinario, tratando de no solo aplicar la sanción, sino también de purificar su espíritu y hacer que se arrepienta y sea reintegrado a la comunidad como una persona nueva. Y es por esto que las leyes ordinarias deben respetar las decisiones de las autoridades indígenas respecto al juzgamiento y aplicación de las sanciones por el cometimiento de contravenciones, infracciones o delitos, ya que la revolución tomada se la acata como cosa juzgada.

Funciones Jurisdiccionales.

Uno de los avances que hace la Constitución del 2008, en relación a la del 98, es precisamente otorgar el derecho y la potestad a las autoridades indígenas para ejercer la función Jurisdiccional.

La Jurisdicción.-

Es la potestad derivada de la soberanía del Estado, que permite aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, el mismo que es capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina “**cosa juzgada**”.

De acuerdo con el Art. 76, Num. 7, lit. i) de la Constitución vigente expresa: ***“Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”.***

Se puede determinar que ninguna persona será juzgada dos veces por la misma causa, ya que si es juzgado por autoridades indígenas por un delito cometido, no podrá ser juzgado nuevamente por la justicia ordinaria, es decir, no se podrá realizar dos procesos judiciales uno en la justicia ordinaria y otro con la justicia indígena por el mismo delito cometido.

El principio Non Bis In Ídem, La Constitución Política de la República del Ecuador (1998), en su art. 24, numeral 16 puntualiza este principio que prescribe: "Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa"; es decir, que no se puede volver dos veces sobre lo mismo y dentro del aspecto procesal significa que ninguna persona puede volver a ser sometida a juicio de cualquier clase que fuere cuando ya ha sido juzgada por el mismo hecho en un juicio anterior.

El indicado principio aunque mantiene su independencia está íntimamente vinculado con la excepción procesal perentoria de la cosa juzgada porque extingue la relación jurídica que se ha establecido entre el juez y los sujetos activo y pasivo, tanto es así que se colige que la infracción delictual ha sido analizada y juzgada dentro de un procedimiento enmarcado en el debido proceso penal.

De acuerdo a la materia se podrá juzgar de acuerdo con el acto cometido, siendo penal, civil o administrativo, que será sujeto a autoridades competentes de acuerdo al caso.

Desde este concepto entenderemos que la palabra jurisdicción en primera instancia sirve para determinar el territorio o el área geográfica del ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad indígena, en este caso se refiere al territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Por lo mismo la función jurisdiccional tiene relación con el poder que una autoridad judicial para ejercer o aplicar el derecho en un territorio. Según el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, también se otorga a la autoridad indígena esa potestad de aplicar el derecho dentro de su territorio, pero no un derecho estatal (derecho positivo- escrito- ordinario), sino un derecho con base a sus tradiciones ancestrales, sus derechos y procedimientos propios, respetando los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

En otras palabras el reconocimiento de las funciones jurisdiccionales establece una competencia territorial a través de la autoridad indígena de la comunidad, pueblo o nacionalidad para administrar justicia o resolver una controversia suscitada en un determinado territorio indígena, aplicando sus derechos y procedimientos propios, en base de las tradiciones ancestrales.

Al referirnos a las tradiciones ancestrales y al derecho propio, básicamente nos encontramos frente a una normativa jurídica o costumbre jurídica que no es escrita ni codificada, por lo que, se ha conceptualizado como un conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia social basadas en la costumbre que de generación en generación han ido transmitiéndose, evolucionando, aplicando y convirtiéndose en verdaderos sistemas jurídicos.

Dentro de su ámbito Territorial.

La Constitución de la República del Ecuador, establece que para la solución de los casos en los cuales interviene la justicia indígena, se tomará en cuenta el espacio físico territorial en el que se encuentran asentadas históricamente las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. De esta forma se delimitará claramente la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas.

Garantía de participación y decisión de las mujeres.

Toda sociedad, comunidad, pueblo o nacionalidad está compuesto por mujeres y hombres, esta composición de dos géneros también se traslada a la responsabilidad que tienen al interior de sus territorios, es común ver mujeres interviniendo en procesos que deben ser resueltos por la jurisdicción indígena, la mujer participa activamente en los distintos momentos, desde el inicio del juzgamiento hasta la aplicación de la sanción, incluso por respeto son ellas las que terminan liderando el proceso.

Normas y Procedimientos propios.

En este elemento, se establece que las autoridades indígenas pueden dirimir sobre distintos conflictos que se presentan al interior de los territorios indígenas, conforme a las normas, procedimientos y sanciones propias establecidas por la comunidad o pueblo indígena.

Las normas y procedimientos propios de las comunidades o pueblos indígenas, constituyen un conjunto de normas y reglas de comportamiento y de actuación que las autoridades indígenas conocen, respetan y aplican; por lo mismo no se sujetará a las normas y procedimientos señalados taxativamente en el derecho adjetivo penal o civil.

Las normas y procedimientos han evolucionado de generación en generación, cambiando y desarrollándose, a pesar de no estar escrito ni codificado, son de conocimiento de la colectividad y se encuentran vigentes en cada territorio indígena con sus respectivas especificaciones y particularidades.

Solución de sus conflictos Internos.

En este elemento se encuentra presente la principal interrogante que es: ¿Qué tipo de delitos deben ser juzgados por la autoridad indígena?

Al referirse la Constitución de la República del Ecuador a los conflictos internos, establece una competencia material: es decir, todo tipo de casos y gravedad, no especifica qué tipos de delitos ni que tipo de gravedad. No obstante para los pueblos indígenas y para el caso de la justicia indígena, **conflicto interno** constituye toda acción o acto que desestabiliza la paz, la armonía y la tranquilidad de un colectivo o de una comunidad. De manera que, todo acto que esté considerado por la comunidad, pueblo o nacionalidad como ilícita, como no permitido, será juzgado a través de la autoridad indígena.

¿Y podrá ser juzgado después civilmente por pago de daños y perjuicios según el Art. 76 de la Constitución?

Se podrá seguir con el trámite por pago de daños y perjuicios ante las autoridades de justicia ordinaria pertinentes, si es que la sanción impuesta por las autoridades indígenas por el acto cometido no consta el pago por daños y perjuicios, caso contrario se asumirá que el acto cometido ya fue solucionado, considerándolo como cosa juzgada.

En este caso tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Convenio 169 de la OIT no limitan materia, ni se refiere qué pasa con la persona no indígena o con la persona ajena al territorio que comete un delito, estas dos normativas facultan que estos casos son de conocimiento y solución de la jurisdicción indígena.

Ningún acto de aplicación de justicia, puede estar en contra a las disposiciones establecidas por la Constitución, a los Derechos Humanos o instrumentos Internacionales.

El delito, los procedimientos y las sanciones deben ser observados y analizados desde la cosmovisión indígena y en relaciones interculturales, más no juzgar un hecho desde la óptica de la justicia estatal o del derecho positivo. Es decir, lo que un acto es penalizado en la justicia estatal no necesariamente es penalizado en la

jurisdicción indígena o viceversa. Lo que en la justicia estatal un acto puede ser una violación de los derechos humanos, desde la cosmovisión indígena puede ser una práctica espiritual de purificación o un acto culturalmente de rehabilitación.

Es así que para los pueblos indígenas las sanciones no son consideradas como negativas, sino que es una forma de hacer que el infractor tome conciencia, se arrepienta y cambie de actitud, en el idioma kichwa se dice *wanachina* (hacer que se arrepienta), *kunana* (aconsejar). Las sanciones son aplicadas también con una connotación espiritual, es decir no solo se quiere corregir la parte racional o fisiológica del infractor sino también purificar el alma y el espíritu

Por tal razón, los conflictos internos que se desarrollan dentro de una comunidad indígena, serán solucionados por las autoridades de las comunidades, en caso de no existir un acuerdo, se dará paso a la intervención del Fiscal de asuntos Indígenas; debiendo intervenir en la solución del conflicto o a su vez dar inicio al proceso, elevando a conocimiento del Juez pertinente.

El estado garantizará que las decisiones de la Jurisdicción Indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.

Es necesario recalcar, que uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir al finalizar el proceso lo que en derecho se denomina cosa juzgada.

Las instituciones y las autoridades públicas deben respetar la autonomía y la independencia que tiene la jurisdicción indígena para resolver los casos conforme su propia concepción del delito o controversia. De no ser respetada la jurisdicción y la competencia indígena nos encontraríamos frente a un caso de doble juzgamiento, y nuestra constitución prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por una misma causa.

Con el fin de corregir y aclarar las distorsionadas y equivocadas interpretaciones del significado de la justicia indígena, principalmente para que exista una

permanente observancia ante posibles excesos que puedan violar los derechos humanos fundamentales de las personas, es necesario establecer cómo y en qué casos de excepción la Corte Constitucional tomará control o conocerá las resoluciones indígenas. Para lo cual será necesario que las personas que ejerzan el Control Constitucional esté conformado por un equipo multidisciplinario e intercultural, con miembros o autoridades de la jurisdicción indígena y la jurisdicción estatal, esto permitirá analizar un acto desde una visión intercultural y se llegue a una solución entendiendo los elementos de la diversidad cultural.

De acuerdo al precepto constitucional del Art. 171, es necesaria la adopción de una Ley de Coordinación y cooperación entre las dos jurisdicciones la indígena y la ordinaria, con la finalidad de coordinar marco de mutuo respeto, para poder llegar a una correcta aplicación de la justicia.

Una Ley secundaria servirá para delimitar la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas y la autoridad estatal en un caso determinado, estableciendo claramente que no se requiere de una Ley secundaria para el ejercicio de este derecho en sí, sino para efectos de coordinación en casos necesarios.

El Monismo y Pluralismo jurídico.

Para una mejor comprensión de lo que significa hablar de diferentes sistemas jurídicos que nacen de las instituciones del estado o que tienen su origen en el poder legislativo es importante definir los siguientes conceptos:

Monismo Jurídico:

Es la existencia de un solo sistema jurídico reconocido por el Estado en todo el territorio nacional. La concepción monista del sistema jurídico o del derecho positivo identifica el derecho con el Estado.

Esta definición valida únicamente al derecho que nace desde el Estado y no concibe ni admite la existencia y vigencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo territorio.

Vicente Cabedo, al tratar este tema, en su ensayo para la universidad de Zulia al monismo jurídico califica como la *“inadecuación cultural del derecho y la justicia estatal”*.

Menciona que la inadecuación estrictamente cultural está determinada de querer imponer un derecho, de patrón occidental, formulado en una sola lengua, que muchos indígenas desconocen, que responden a una lógica jurídica y a una nacionalidad en gran parte antagónicas a la cultura indígena, y que es, no en pocas ocasiones ignorado.

Bajo estos conceptos los gobernantes han implementado estrategias para desconocer y eliminar los sistemas de administración de justicia de los pueblos y nacionalidades, los mismos que hemos conservado y aplicado al interior de nuestros espacios territoriales, aun así la aplicación de la administración de justicia indígena ha sido motivo de críticas y emisión de juicios de valor, muchos calificativos han recibido tales como: aplicaciones salvajes, folclóricas, irracionales, primitivas que atentan contra los derechos humanos, etc.

A pesar de todos los intentos para desaparecer, nuestro sistema de administración de justicia ha permanecido vigente y conservado con cierto recelo frente a la población no indígena y a las autoridades estatales, esto ha permitido que en la actualidad, aun podamos observar, en nuestras comunidades la aplicación de la justicia basándose en normas, principios y procedimientos propios y con la intervención de las autoridades comunitarias mediante el cual se ha logrado mantener la armonía y el orden social al interior de nuestros pueblos y nacionalidades.

Pluralismo Jurídico.

El Pluralismo Jurídico es la contradicción al concepto de monismo jurídico, mientras para éste último en un territorio existe un solo sistema jurídico, para el primero es la vigencia de dos o más sistemas jurídicos en un mismo territorio.

Para Cabedo, Vicente (2002: 63), citado por Ilaquiche, Raúl en su libro Pluralismo Jurídico y Administración de Justicia en el Ecuador (2006: 39) *“Pluralismo Jurídico es la coexistencia de dos o más sistemas normativos que pretenden validez en el mismo territorio (...) o lo que es lo mismo (...) el fenómeno de la existencia de normas que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos”*.

Para Ilaquiche, Raúl en su libro Pluralismo Jurídico y Administración de Justicia en Ecuador, (2006:39) *“El pluralismo jurídico en el caso ecuatoriano, se evidencia por la existencia y vigencia de un sistema jurídico nacional, la presencia y vigencia de varios otros sistemas normativos indígenas dentro del mismo territorio”*

En esta última década se ha venido hablando de un *pluralismo jurídico* a diferencia del monismo jurídico, lo cual reconoce la coexistencia de varios sistemas normativos, estén o no reconocidos legalmente dentro del Estado o del espacio geopolítico en el que existan. Sin embargo cuando no son reconocidos por el Estado y no existe la voluntad política de los gobernantes para la aplicación, no pasa de ser simples enunciados teóricos y es subvalorado y menospreciado.

Pues bien, con estas dos concepciones nos queda claro el sistema jurídico único y el sistema jurídico plural, acoplándonos a la realidad de nuestro país plurinacional y pluricultural, es necesario y urgente en el marco de ir también poniendo en práctica las relaciones interculturales comencemos a pensar en una nueva concepción del derecho y asumir que existen dos o más derechos o sistemas jurídicos en un mismo territorio con el mismo valor y con la misma exigencia de respeto, aplicación y vigencia.

La validación constitucional a la práctica de los usos y costumbres indígenas, trae consigo el establecimiento del Pluralismo jurídico en el Ecuador, así, con el reconocimiento Constitucional del Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador queda reafirmada que en un mismo ámbito territorial conviven dos o más sistemas jurídicos.

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989

Con el fin de garantizar los Derechos de los pueblos indígenas sobre la prevención de la discriminación, considerando su cultura y costumbres, se procede a adoptar, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 que manifiesta:

“Parte I. Política general

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras

Artículo 13

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre las tierras entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen”.

Una vez analizado este convenio, se puede determinar que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, incluido el de administración de justicia indígena son derechos humanos, primero, porque les son reconocidos a las agrupaciones no en cuanto seres abstractos, sino por estar integrados por seres humanos, segundo, porque satisfacen su vocación a la vida social y son condición para que desarrollen sus capacidades y realicen su destino, por tanto rige el principio de indivisibilidad y complementariedad.

Los derechos humanos, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad y no se podrá alegar falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

De tal manera que el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia, fue directa e inmediatamente aplicable desde la vigencia de la Constitución Política, esto es, desde el 10 de agosto de 1998, sin que se pueda alegar falta de ley, pues, la Constitución establece que la ley lo único que realizará es buscar la compatibilidad entre la administración de justicia indígena y el sistema judicial nacional.

La administración de justicia indígena de acuerdo a la Constitución Política del Ecuador de 1998, en su Art. 191, inciso cuarto dice: *"Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y*

procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional".

Este reconocimiento implica:

1. El reconocimiento del sujeto titular de este derecho, que son los pueblos indígenas, estas colectividades tienen sus formas particulares de organización social, económica, política y jurídica.
2. Cuando la Constitución hace referencia a las "autoridades de los pueblos indígenas" se trata de las autoridades que según los sistemas indígenas tienen potestad para resolver conflictos o regular la vida social. "Por tanto, el pueblo indígena a través de su propio derecho determinará quien es la autoridad indígena facultada para aplicar la regla de conducta de sus miembros". De tal manera que, la autonomía no es una palabra, es una capacidad que tiene los pueblos indígenas para organizar, regular y resolver los conflictos, por sus propias leyes, costumbres o tradiciones.
3. Al referirse a las normas y procedimientos propios o derecho propio como lo preferimos llamar al interior de los pueblos indígenas. El reconocimiento incluye no solo a las normas actualmente vigentes de los pueblos indígenas, sino a su potestad legislativa específica para producir normas, ya sea creando o modificando, a fin de regular su vida social y organizar el orden comunitario interno. "Por ello, posiblemente de una forma lo hagan los Kichwas, de otra forma los Shuaras, los Cofanes, entre otros.

Este derecho es tan respetable como el derecho estatal. Los pueblos indígenas tienen su propio mecanismo para crear sus normas, para crear una regla. De la misma manera que la autoridad indígena no podrá indicarle a la autoridad estatal como ha de crear una ley, ésta no podrá indicarle como ha de crear el derecho indígena ni quien ha de aplicarlo.

4. Según la teoría clásica del derecho procesal uno de los tres elementos de la jurisdicción es la notio, que se define como la facultad de conocer los asuntos que de acuerdo con las reglas de competencia corresponde a cada juez, en este caso a las autoridades de los pueblos indígenas. La notio presupone la facultad de citar a las partes, recaudar las pruebas, hacer notificaciones, etc. Las reglas de competencia siguiendo a esta teoría, está determinada por la materia, personas y territorio.

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, no hace ninguna limitación de la competencia de la autoridad indígena en cuanto a la materia, por tanto será competente para conocer todo tipo de materia, que por cierto en el derecho indígena no existe la división que conoce el derecho estatal.

Tampoco hace referencia a la limitación de la competencia en cuanto se refiere al territorio y personas. Sólo habla de la solución de conflictos internos.

Por tal razón se puede manifestar, que la infracción de las normas internas del pueblo indígena, cometidas entre sus miembros o entre un miembro y otro que no sea parte del pueblo indígena dentro de la jurisdicción territorial del pueblo indígena, es un problema interno, por tanto de competencia del pueblo indígena en donde se cometió la infracción. De igual modo sucedería en el caso de que entre miembros de un pueblo indígena violen una norma interna fuera del territorio indígena.

Inclusive, las infracciones de las normas internas del pueblo indígena cometidas por miembros que no son parte de los pueblos indígenas dentro de su jurisdicción, serán de competencia de las autoridades de los pueblos indígenas.

El asunto se torna discutible, cuando dos miembros de los pueblos indígenas cometen una infracción de la ley estatal fuera del territorio del pueblo indígena, o cuando un miembro del pueblo indígena y otro que no sea parte de este, cometan una infracción de la ley estatal también fuera del territorio indígena; así como,

cuando un miembro del pueblo indígena con otro que no se parte del pueblo indígena cometen un acto determinado como infracción en el derecho indígena y lo cometan fuera del territorio indígena, en este último caso, puede ser considerado como un conflicto interno, pues, se viola una norma interna de la comunidad, que desestabiliza el orden social establecido.

En los casos, en que fuera de competencia del juez estatal, está plenamente garantizado que jueces estatales que juzguen a los miembros de los pueblos indígenas deben considerar su cultura y costumbres, conforme lo establece el Art. 9 del Convenio 169 de la OIT. Esto puede dar lugar a la exención de responsabilidad penal cuando la comisión del hecho punible se basa en un condicionamiento cultural. Si se impone sanciones en estos casos, éstas deben ser perfectamente alternativas a la cárcel, por así ordenar el Art. 10 del Convenio 169 de la OIT.

Pero las preguntas pueden seguir surgiendo: ¿Cuál es el territorio indígena?, desde luego el territorio incluye no solamente los reconocidos como propiedad, sino también los que tradicionalmente han sido ocupados por el pueblo indígena, conforme lo establece el Art. 14 del Convenio 169 de la OIT.

En resumen se ha de considerar conflicto interno, cuando se violente una norma interna, ya sea por sus miembros o no miembros. De ahí que, existen tres factores que determinan los asuntos de los que pueden conocer las autoridades de los pueblos indígenas en calidad de administradores de justicia: la norma que se infringe, territorial y el factor de pertenencia a un determinado pueblo indígena.

Hay quienes sostienen que la facultad conferida a las autoridades de los pueblos indígenas para resolver conflictos internos, está limitada por cuanto no deben ser contrarios a la Constitución y las leyes. Si el derecho a administrar justicia es un derecho humano colectivo reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas, no podría restringirlo ninguna ley, si de hecho lo limita estaremos frente a una ley inconstitucional y por lo tanto inaplicable.

Administración de Justicia Indígena en el Ecuador

Para Tibán, Lourdes e Ilaquiche, Raúl, en el Manual de Administración de Justicia Indígena en el Ecuador (2004; 23), manifiestan que: *“La administración de Justicia Indígena en el Ecuador, es un tema que muchas veces ha sido entendido equivocadamente como linchamientos, salvajismo o la aplicación de sanciones inhumanas o que atentan a los derechos universales”*. Pero, la realidad es distinta: para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la forma propia de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias autoridades, que mediante la aplicación de medidas conciliadoras en algunos casos, o ejemplificadoras en otros, se restablece al armonía colectiva; para ello se basan en sus propios usos y costumbres además de un procedimiento preestablecido y conocido por todos.

El derecho indígena, la justicia indígena, el derecho consuetudinario, el derecho propio, los usos y costumbres jurídicos, son diferentes términos que se han ido desarrollando para referirse a las formas y sistemas jurídicos que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas, no solo para resolver un conflicto, sino para convivir en un marco de respeto y conducta social armónica entre toda la colectividad territorial.

Estos términos, para muchas personas que no son parte de los pueblos indígenas son utilizados en forma equivocada para referirse y compararlos con linchamientos, salvajismo o la aplicación de sanciones inhumanas que atentan a los derechos universales, esto principalmente se ha dado por los últimos acontecimientos de ajusticiamiento cometidos en barrios no indígenas de varias provincias del país, la justicia indígena es un tema que muchas veces ha sido entendida equivocadamente, debido a la mala información de los medios de comunicación, ya que ellos destacan que todo lo malo es justicia indígena, sin saber a ciencia cierta cómo funciona en realidad la Administración de Justicia Indígena y que en su aplicación jamás atentan a los derechos individuales de cada

ser humano, ya que la justicia indígena es la forma propia de resolver y solucionar los conflictos a través de sus autoridades, mediante la aplicación de medidas conciliatorias y alternativas al encarcelamiento.

Para entender de una mejor manera, a lo que se refiere la Justicia Indígena es necesario conocer algunos términos como son:

Indígena.

El diccionario de la Real Academia de la lengua Española define que: ***“indígena es el originario del país en que se trata”***

De igual manera el diccionario manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., especifica ***“indígena.- Persona que es un habitante nativo del territorio en que vive”***.

Por su parte Rodolfo Stavenhagen (2002; 93) señala que: ***“son indígenas los descendientes de los pueblos que ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado o colonizado por una potencia o una población extranjera”***.

Según estas definiciones, el vocablo “indígena” designa a mujeres y hombres originarios de un determinado lugar, que han vivido históricamente en él hasta nuestros días. Son indígenas por ser originarios y autóctonos de un país; por habitar un territorio determinado y mantener sus propias costumbres y formas de vida.

Por lo tanto el término indígena se interpretará como una persona que pertenece a una colectividad distinta del resto de la sociedad blanca mestiza, originario de un determinado territorio y que mantienen sus propias instituciones económicas, sociales, jurídicas, culturales y organizativas.

Derecho Consuetudinario.

Para Stavenhagen citado por: Cabedo (2002: 69-70), el derecho indígena es *"un conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto de un derecho vigente en un país determinado". Agrega que, "es un conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia social que contribuyen a la integración de una sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de conflictos (incluyendo un sistema de sanciones para quienes violen esas normas) (...) que no ha sido creado por el Estado, a través de los órganos correspondientes, en ejercicio de su propia soberanía"*

Para Ilaquiche, Raúl, en su libro Pluralismo Jurídico y Administración de Justicia Indígena en Ecuador: (2006; 2), manifiesta: *“Derecho Consuetudinario, que básicamente nos encontramos frente a una normativa jurídica o costumbre jurídica no escrita”*

El derecho consuetudinario es por lo tanto, un conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia social, basadas en la costumbre, las mismas que no están escritas ni codificadas. Estas normas hacen que sus miembros puedan mantenerse en armonía y resuelvan sus conflictos. Es distinto al derecho positivo y por lo mismo no nace de una institución del Estado sino de la práctica permanente de los pueblos indígenas que durante el tiempo se han mantenido como verdaderos sistemas jurídicos, y no solamente como el derecho positivo lo califica como simples usos y costumbres.

Derecho Indígena:

En uno de los órganos de difusión de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE(1992;6), encontramos que el derecho indígena es *"un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de su conjunto de normas regula los más diversos aspectos y conductas del convivir comunitario. A diferencia de lo que sucede con la legislación oficial, la legislación indígena es conocida por todo el pueblo, es decir que existe una socialización en el*

conocimiento del sistema legal, una participación directa en la administración de justicia, en los sistemas de rehabilitación, que garantizan el convivir armónico. El derecho indígena, que tiene su propio sistema de legislación, su administración de justicia, sus sistemas carcelarios, por lo mismo tiene también su fundamento, su base, en la costumbre, es decir en el derecho consuetudinario".

Según Vicente Cabedo (2002: 69-70), el derecho indígena “*está ligado a tres términos característicos:*

a) Derecho, entendido como un conjunto de normas y reglas jurídicas que regulan la convivencia social de una colectividad indígena. Es decir, es un verdadero sistema jurídico y no una mera normativa.

b) Consuetudinario, que básicamente nos encontramos frente a una normativa jurídica o costumbre jurídica no escrita.

e) Indígena, como colectividades distintas del resto de la sociedad blanco-mestizo, originarios de un territorio determinado y que mantienen sus propias instituciones económicas, sociales, jurídicas, culturales y organizativas”.

El derecho indígena o sistema jurídico propio, es que éste, se acopla a la realidad del momento; es decir, camina a la par con el correr del tiempo. No es un código poseedor de normas estables como el derecho escrito.

El derecho indígena de ayer no es el mismo de hoy, porque está en permanente transición, ligado a un pueblo inmerso en un proceso histórico de cambio. Este pueblo vive su realidad y no pertenece al pasado, como muchos han catalogado a sus legítimas reivindicaciones, al decir que no debemos pretender recuperar valores y regresar al pasado.

De la misma forma, el derecho indígena junto con otros elementos constituye un elemento de la identidad étnica de un pueblo; por ello, cuando un pueblo reivindica su vigencia, está luchando por la permanencia de una parte esencial de su identidad cultural, y permite conocer de mejor manera su cosmovisión.

Costumbre Jurídica:

La costumbre jurídica o el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas ha sido vedada de su utilización; es más; no es fuente inmediata del derecho, sino secundaria y supletoria. Es jurídicamente obligatoria y tomada en cuenta como fuente formal, sólo cuando la ley expresamente lo estipula al disponer en el artículo 2 del Código Civil que *"la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella"*.

La condición subordinada de la costumbre jurídica o el sistema jurídico propio en la legislación ordinaria, así como su desconocimiento, han hecho que casi nunca los usos y costumbres sean tomados en cuenta en los procesos de administración de justicia. Más bien, ha impedido categóricamente su reconocimiento, su utilización y consiguientemente las costumbres jurídicas han sido condenadas a la clandestinidad. Así, el artículo 3 del Código Penal reza: *"se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa"*.

Para Larrea, Holguín 1984/ citado por Ilaquiche, Raúl en el libro Pluralismo Jurídico y Administración de Justicia Indígena en Ecuador (2006:28) *"La costumbre es jurídica porque tiene un carácter normativo"*.

Este carácter tiene aquellas costumbres cuyo cumplimiento es exigido por una necesidad psicológica y social, real o imaginaria de la colectividad, la costumbre jurídica por la situación social, cultural, geográfica y regional de los pueblos indígenas es de gran diversidad y eso explica que sus normas y tradiciones difieran de un lugar a otro, incluso dentro de una misma parroquia o comunidad.

Derecho Propio.

Es la capacidad de darse sus propias normas. Es el Derecho que se origina, evoluciona y se aplica por la reiteración de los hechos en el tiempo. Este derecho no surge de la Función Legislativa, sino de manera autónoma e independiente de un Estado.

Autoridad Propia.

No elige el Estado con una imposición de reglas (currículum académico), es la persona que es elegida y reconocida por una demostración sistemática de actuaciones éticas y morales que son de conocimiento de la comunidad o pueblo. No actúan solo en temas de solución de conflictos o de las inobservancias de las normas sociales, sino que es el eje mediante el cual se conduce y se guía la vida y el desarrollo de una colectividad, se busca el bien social constituyéndose un modelo de autogobierno indígena.

Derechos Colectivos.

Los derechos colectivos son diferentes a los derechos individuales. Mientras el derecho individual constituye los derechos humanos de una persona, hombre o mujer, mientras que los derechos colectivos son derechos humanos, cuyos titulares son las colectividades, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades. Es decir, derechos que pertenecen a un grupo social y no a una sola persona. Ejemplos de derechos colectivos puede ser: derecho a la identidad, derecho al medio ambiente sano, la educación en su propia lengua, la propiedad imprescriptible e indivisible de las tierras comunales, entre otros.

En tal virtud, en los últimos años se han dado cambios importantes debido a la introducción en las reformas constitucionales que reconocen explícitamente ciertos derechos indígenas como el idioma, la educación bilingüe, salud indígena intercultural, los derechos colectivos, las circunscripciones territoriales indígenas,

la administración de Justicia Indígena, logros que responden a los procesos de lucha reivindicativos de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones que de manera permanente han luchado por el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y que estos no sean considerados como simples costumbres, sino como verdaderos Sistemas de Derecho.

Procedimiento para la aplicación de Justicia Indígena

Las comunidades indígenas de Cotopaxi desde muchas décadas atrás han venido administrando justicia y resolviendo sus conflictos internos comunitarios de conformidad a sus costumbres y formas propias de solución de conflictos. Es así que al hablar de jurisdicción está plenamente definido el territorio comunal, en la comunidad se conoce y se resuelve conflictos internos tipificados como leves y que no causen conmoción social, entre estos conflictos se puede citar, problemas matrimoniales, conflicto de linderos entre vecinos, agresiones entre familias de la misma comunidad, deudas, daños a la propiedad, robos, hurtos de cantidades pequeñas, abigeatos, injurias, intimidación, abuso de confianza, infidelidad, adulterio.

Sin embargo de acuerdo al tipo y gravedad del conflicto la jurisdicción sale del territorio comunal, así por ejemplo cuando existe un conflicto de linderación de tierras comunales entre dos o tres comunidades, el conflicto se extiende a otras comunidades que se ven afectados en sus derechos, de la misma forma cuando en un conflicto de carácter matrimonial, o de agresiones, los involucrados son de distintas comunidades, la jurisdicción sale del ámbito comunal y se busca una comunidad neutral para poder buscar una solución y resolver el conflicto.

De acuerdo a la gravedad del conflicto, como son las muertes, asesinatos, accidentes de tránsito, violaciones, adulterio reiterado, conflictos de tierras comunales, que son consideradas como las más fuertes, las autoridades del Cabildo buscan el asesoramiento y respaldo de otros dirigentes indígenas de comunidades vecinas para que apoyen en la resolución del conflicto, cuando se

dan este tipo de casos, el conflicto no se resuelve en la jurisdicción comunal por la gravedad del caso, sino que es tratado en la Organización de Segundo Grado conformado por la unión de comunidades indígenas de la Parroquia o zona geográfica que oscila entre veinte y cuarenta comunidades, dependiendo de la OSG, en este espacio participan las autoridades indígenas de cada comunidad para la solución del conflicto.

Las personas competentes para conocer los conflictos internos de las comunidades son el Presidente y los miembros directivos del cabildo de la comuna, cuando los conflictos sobrepasan el territorio de la comunidad y se sube a un segundo nivel de conocimiento y resolución del conflicto que es la Organización de Segundo Grado, la autoridad competente para conocer y resolver el conflicto es la autoridad indígena y los miembros del Consejo de Gobierno de la OSG, quienes conocen y resuelven el conflicto acompañados y asesorados por las autoridades indígenas de las comunidades de base. Cuando existen conflictos muy graves como asesinatos y confrontamientos por cuestiones territoriales entre varias comunidades el conflicto se conoce y se resuelve en un tercer nivel con la participación de las autoridades Indígenas del Consejo del Gobierno del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Ecuarrunari, CONAIE.

Como vemos la competencia no solo se radica en la autoridad indígena de la comunidad, sino que por el contrario dependiendo de la gravedad y la complejidad del conflicto su competencia y conocimiento puede alcanzar hasta las autoridades indígenas de la Provincia y a nivel nacional.

Cabe destacar que en las comunidades se conoce y se resuelve todo tipo de conflictos que dañen o alteren la paz y la armonía de la comunidad, no existe la clasificación de delitos, es decir casos que puede conocer la autoridad indígena y otros casos que puedan conocer las autoridades de la justicia ordinaria.

La jurisdicción y competencia en muchas ocasiones sale del ámbito territorial de la comunidad, en circunstancias en que se cometen infracciones entre miembros

de la comunidad indígena en otras circunscripciones territoriales de la Provincia o fuera de ella, en estos casos las partes dan aviso a la autoridad indígena de su comunidad para que el conflicto suscitado fuera de la comunidad sea conocido y resuelto por la autoridad indígena, por lo que en varias ocasiones se ha observado que los casos cometidos en Latacunga, o en otros lugares, previo el pedido del ofendido y la autorización de la autoridad indígena que es considerado como el juez natural de la comunidad, a través de la designación de comisiones, los involucrados han sido trasladados hasta el territorio comunal a donde pertenecen para ser sometidos al conocimiento y sanción de la autoridad indígena comunal, en vista de que en otras provincias no se sienten identificados por la autoridad que conoce el caso por cuanto desconoce sus costumbres, su cultura, su idioma y las formas propias de solución del conflicto de su comunidad de origen.

En los últimos años, por la gran cantidad de índice migratorio que ha existido de los indígenas a la grandes ciudades, en el caso de Latacunga en los últimos diez años se ha notado la presencia de un gran porcentaje de población indígena asentados en sectores periféricos de la ciudad, existen asentamientos con una población de un 80 % de indígenas, estos barrios tienen su propia autoridad indígena, mantienen las mismas costumbres y formas propias de solución de conflictos, por lo que cuando existe un problema que se suscita en la ciudad, no acuden a la Comisaría, o a la intendencia, los problemas son denunciados en la Fiscalía Indígena y la autoridad indígena solicita la competencia para resolver los conflictos en el barrio en donde se encuentra asentada la población indígena.

Como vemos existen varios niveles de jurisdicción y competencia en la Administración de Justicia Indígena, y para cada caso se da un tipo de sanción que permita disciplinar al infractor, rehabilitar y reinsertar en la vida comunitaria. Las sanciones van desde consejos, llamadas de atención, amonestaciones, sanciones económicas de acuerdo a la gravedad del conflicto, castigos corporales, trabajos de carácter comunitario, internamiento en centros de rehabilitación mental o psicológica, si es que se identifica que el infractor no está en un estado de salud mental normal y requiere de ayuda médica o terapéutica, la sanción más

grave es que si el infractor ha reincidido en el cometimiento del delito y no ha acatado las resoluciones de la comunidad, es la pérdida de los derechos de comunero y la expulsión del territorio comunal por un número determinado de años, luego de la cual puede pedir su reinserción en la comunidad.

En la justicia indígena; las autoridades actúan por medio de rogación o petición de partes. Solo los afectados o sus familiares pueden hacer la solicitud de intervención al cabildo o a los dirigentes de la organización para que establezca el orden en la comunidad, en la familia; los procedimientos a seguirse son las que a continuación se detalla:

TAPUYKUNA

Esta etapa implica un estudio hacia atrás, es decir, una investigación del problema con una variedad de diligencias como la inspección ocular en casos de robo, peleas, para determinar a los verdaderos responsables, recibir testimonio de las partes involucradas, en ocasiones se practica el allanamiento de la vivienda, donde posiblemente se encuentren objetos robados a fin de recabar más elementos.

CHIMBAPURANA

Esta instancia de juzgamiento, consiste las confrontaciones de palabras entre los involucrados. Además intervienen los miembros de Cabildo, dirigentes de otras comunidades, es decir, es la exposición de las partes y autoridades.

Este procedimiento tiene una secuencia lógica y tiene dos momentos importantes, así: en primera instancia, el presidente del cabildo o de la organización, según haya recaído la competencia, instala la asamblea. Acto seguido, informan detalladamente el contenido de la demanda y los resultados de la investigación.

El segundo paso es concretamente el chimbapurana.- El solicitante o demandante, es quien de manera oral relata acontecimientos y los hechos que le han motivado a iniciar la acción judicial comunitaria; luego el acusado hace de su legítimo derecho a la defensa al igual que el demandante. El acusado, en su intervención contesta la demanda aceptando el relato o negando los fundamentos.

Finalmente, el cabildo o los dirigentes, según el caso, hacen una evaluación de lo contenido, reflexionan todo los elementos vertidos sea la responsabilidad; inmediatamente proceden a determinar las soluciones o sanciones que impondrá previa la aceptación de la asamblea.

KISPICHIRINA

Las resoluciones son impuestas por el cabildo o por los dirigentes del Consejo Directivo de la organización, conjuntamente con la asamblea de manera unánime, en consenso, existen un sin número de sanciones como la multa, el baño con agua fría, con ortiga, el fuste o látigo, trabajos en las comunidades

Las multas son establecidas de acuerdo a la cuantía y naturaleza de la causa, como también de acuerdo a la gravedad del caso.

PAKTACHINA

Es la etapa de cumplimiento de las sanciones. Las sanciones corporales como el látigo, el baño y la ortiga deben ser ejecutadas por hombres o mujeres de buena reputación y honestidad. Las sanciones establecidas por las autoridades que administran justicia y asamblea deben ser cumplidas de manera obligatoria.

De la información recibida, se destaca que todas las resoluciones que se adoptan quedan recopiladas en acta y guardadas en el archivo de las comunidades.

Relaciones de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria

De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial debemos considerar los siguientes artículos, que nos ayudarán a una comprensión más amplia de cómo se debe aplicar la Justicia Indígena con relación a la Justicia Ordinaria:

“ Art. 343.- ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o

consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres.

Art. 344.- PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- *La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes principios:*

- a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural;*
- b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena.*
- c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional;*
- d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal*

manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible; y,

- e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.*

Art. 345.- DECLINACIÓN DE COMPETENCIA.- Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenarán el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena.

Art. 346.- PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- El Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

Especialmente, capacitará a las servidoras y servidores de la Función Judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de su competencia en territorios donde existe predominio de personas indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, prácticas ancestrales, normas y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas.

El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena”.

Funciones de las Fiscalías Provinciales

Según la Fiscalía General del Estado, Fiscalías Provinciales, Funciones [en línea] Ecuador. Marzo 2010 [ref. 11-03-2010]. Disponible: <http://www.fiscalia.gov.ec> manifiesta que *“Los Fiscales Provinciales conocen los delitos de acción pública, en los que pudieren estar involucrados funcionarios con fuero de Corte Superior: Gobernadores, Alcaldes, Prefectos, Oficiales de la Fuerza Pública, entre otros”.*

De acuerdo a la Constitución vigente al ser creadas las Fiscalías de asuntos Indígenas, como parte de las Fiscalías Provinciales, se tomara en consideración todo aquello que por su naturaleza deba conocer mencionada Fiscalía, respetando costumbres y tradiciones; identificado en el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador.

1.2 MARCO CONCEPTUAL

Ancestral *adj.* **1** Relativo a los ancestros. **2** Que es muy antiguo. **3** Relativo a los antepasados.

Castigo *s. m.* **1** Pena que se aplica por haber cometido una falta o delito. **2** Persona, animal o cosa que causa sufrimientos, trabajos y molestias. **3** Pena que se impone al que ha cometido un delito o falta.

Costumbre *s. f.* **1** Manera de actuar que se repite con frecuencia o con regularidad. **2** Práctica usual que ha adquirido categoría de precepto. **3** Conjunto de elementos que caracterizan la conducta de una persona o grupo social según los usos impuestos por las generaciones anteriores.

Derecho. La palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. En primer lugar, designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya inobservancia está sancionada.

Fiscal. Perteneciente al fisco o al oficio de fiscal. Ministro encargado de promover los intereses del fisco. Quien representa o ejerce el ministerio público en los juzgados o tribunales. El que averigua o delata las operaciones de una persona.

Indígena *adj.* **1** Relativo a un pueblo que es el habitante primitivo del territorio en que vive. **2** Persona que es un habitante nativo del territorio en que vive

Justicia *s. f.* **1** Cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el derecho que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos, que le sea reconocido lo que le corresponde o las consecuencias de su comportamiento. **2** Aplicación de un castigo o una pena tras un juicio. **3** Organismo oficial que se encarga de juzgar y de aplicar las leyes. **4** Derecho, razón, equidad.

Jurisdicción. Cuando los particulares, no pueden regular espontáneamente sus relaciones, cuando la función preventiva del contrato o de la ley es insuficiente cuando las soluciones contractuales o legales son contrarias al valor derecho, se interrumpen las relaciones sociales y es indispensable la remoción del obstáculo para que el orden jurídico pueda proseguir su curso.

Linchamiento *s. m.* Acción que consiste en matar una muchedumbre a una persona sospechosa de algún crimen sin hacer antes un juicio, y tomándose la justicia por su mano.

Tortura *s. f.* **1** Castigo físico o psíquico que se realiza sobre una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo. **2** Sufrimiento físico o moral muy intenso.

Tradición *s. f.* **1** Conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o se mantienen de generación en generación.**2** Transmisión o comunicación de este conjunto de ideas, usos o costumbres mantenidas de generación en generación. **3** Desarrollo de una misma actividad que se produce en un lugar determinado a lo largo del tiempo.

CAPÍTULO II

2.1 CARACTERIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO

Unidad Especializada en Asuntos Indígenas

Las unidades de asuntos indígenas (Fiscalías de asuntos indígenas) fueron creadas ante la imprescindible necesidad de establecer nexos de acercamiento con las comunidades indígenas, a fin de que la aplicación del sistema procesal penal sea ágil, efectivo, y oportuno en la tramitación de los procesos penales que demanda este sector.

Uno de los principales objetivos por los que se creó estas unidades, es disminuir la incidencia de la justicia por mano propia o la mal llamada “Justicia Indígena”, que en la última época se convirtió en la salida alternativa a la desatención del sistema de justicia penal.

Al analizar las funciones de la fiscalía podemos darnos cuenta, la importancia de la creación de la Fiscalía de asuntos Indígenas, ya que con este se pretende disminuir el ajusticiamiento por mano propia y dar oportunidad a una administración de justicia imparcial, observando el debido proceso y dictar una sentencia en forma justa, respetando los principios fundamentales de los Derechos Humanos.

Para un mejor manejo de la justicia, se han creado 11 Unidades de Asuntos Indígenas ubicadas en: Otavalo, Cayambe, Latacunga, Guaranda, Ambato,

Guamote, Saraguro, Puyo, Macas, Zamora y Guayaquil, lo que permite una ágil intervención de la justicia en las diferentes provincias del país.

La distribución de encuestas en los cantones de la provincia de Cotopaxi se las realizará de acuerdo al porcentaje de la población total de los mismos; con excepción a La Mana y Pangua, ya que cuentan con una Fiscalía de asuntos Indígenas en su jurisdicción.

2.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Se la realiza con el fin de obtener respuestas a las preguntas realizadas en las encuestas y entrevistas, las mismas que servirán de instrumentos para obtener resultados acorde a los métodos de investigación utilizados como son las encuestas y entrevistas de acuerdo a la población indígena de la provincia de Cotopaxi. (Ver Anexo “A”).

Para obtener estos resultados, es necesario aplicar las encuestas en las Comunidades Indígenas y entrevistas a profesionales especializados en el tema en los diferentes niveles:

- Autoridades de las Comunidades Indígenas.
- Indígenas de la Comunidad, tanto hombres como mujeres.
- Profesionales de Derecho especializados en la materia de Justicia Indígena.
- Fiscal Especial encargado de asuntos indígenas.
- Defensoría del Pueblo en el área de Justicia Indígena.

Una vez realizado el acercamiento a las personas antes referidas, se puede tener resultados óptimos en la investigación, los mismos que servirán para determinar las atribuciones que debe cumplir el Fiscal de asuntos Indígenas de la Provincia de Cotopaxi y pueda ejercer Justicia de forma correcta y adecuada, respetando los derechos humanos y evitando linchamientos o asesinatos ejecutados por mano propia como mala interpretación de Justicia Indígena.

2.3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS SOBRE LA ADMINISRACION DE JUSTICIA INDIGENA

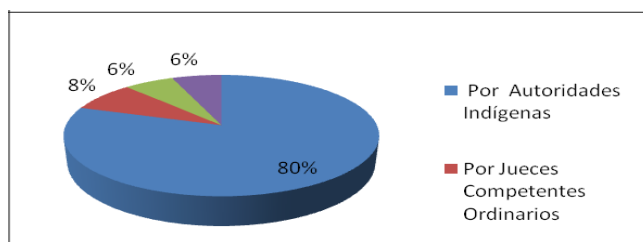
1.- Por quién considera usted, que debe ser aplicada la Justicia cuando se comete un delito dentro de una Comunidad Indígena?

CUADRO N° 1

	# ENCUESTAS	%
Por Autoridades Indígenas	125	80
Por Jueces Competentes Ordinarios	12	8
Por el Comisario	10	6
Por el Intendente de Policía	9	6
TOTAL	156	100

Muestra: 156

GRAFICO N° 1



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 1

De las ciento cincuenta y seis encuestas aplicadas a las diferentes Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, en lo referente a la pregunta planteada un 80% manifiesta que todo delito debe ser Juzgado por Autoridades Indígenas, un 8%, manifiesta que debe ser Juzgado por Jueces Competentes Ordinarios, un 6% por el Comisario y un 6% por el Intendente de Policía.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de los encuestados consideran, que cuando se comete un delito dentro de una Comunidad Indígena debe ser puesto en conocimiento y juzgado por Autoridades Indígenas, basándose principalmente al derecho consuetudinario, y que las sanciones impuestas estén acordes a sus culturas y tradiciones.

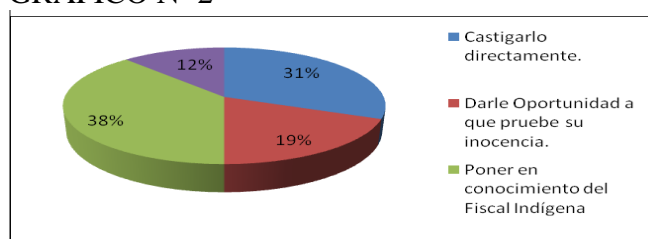
2.- Considera usted, que al ser detenido una persona por el cometimiento de un delito en una comunidad indígena se debe:

CUADRO N° 2

	# ENCUESTAS	%
Castigarlo directamente.	48	31
Darle Oportunidad a que pruebe su inocencia.	30	19
Poner en conocimiento del Fiscal de asuntos Indígenas	60	38
Exigir el pago por daños y perjuicios	18	12
TOTAL	156	100

Muestra: 156

GRAFICO N° 2



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 2

De las ciento cincuenta y seis encuestas aplicadas a las diferentes Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, en lo referente a la pregunta planteada un 38% manifiesta que cuando una persona es detenida por el cometimiento de un delito en una comunidad indígena, se lo debe poner en conocimiento del Fiscal de asuntos Indígenas, un 31%, manifiesta que se lo debería castigar directamente por la comunidad, un 19%, ha considerado que se debe darle oportunidad a que pruebe su inocencia y un 12%, indica que debería pagar primero por daños y perjuicios y luego debe ser puesto en libertad.

Una vez analizados los resultados se puede determinar que la mayoría de los encuestados tiene conocimiento de las funciones que tiene la Fiscalía de asuntos Indígenas como autoridad, sin embargo el porcentaje que continúa en orden descendente manifiesta que se debe castigarlo directamente en la Comunidad, ya que todavía no creen en la buena aplicación de la justicia, en razón de que no se ha visto resultados en los procesos que están en trámite de la Fiscalía originando de esta manera desconfianza en la aplicación de la Justicia.

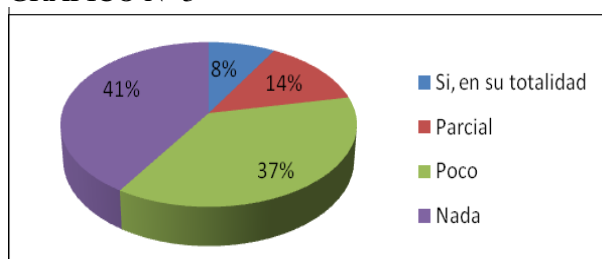
3.- Conoce usted, cuáles son las funciones de la Fiscalía de asuntos Indígenas?

CUADRO N° 3

	# ENCUESTAS	%
Si, en su totalidad	13	8,33
Parcial	21	13,46
Poco	58	37,18
Nada	64	41,03
TOTAL	156	100

Muestra: 156

GRAFICO N° 3



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 3

Del resultado obtenido en las diferentes Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, el 41% manifiesta que no tienen conocimiento de las funciones de la Fiscalía de asuntos Indígenas, un 37%, manifiesta tener un poco de conocimiento, un 13,4%, ha manifestado conocer parcialmente las funciones de la Fiscalía y un 8%, indica que si conocen en su totalidad las funciones de la misma, este porcentaje se relaciona a las Autoridades Indígenas que son quienes están vinculados con la aplicación de la justicia.

De lo expuesto, se puede establecer que no existe una difusión completa a todas las personas que habitan en las comunidades indígenas y se conforman con escuchar o creer lo que las autoridades les dicen; por tal razón es fundamental realizar una campaña de difusión en todos los niveles de las Comunidades sobre las funciones de la Fiscalía de asuntos Indígenas como Autoridad y que todos conozcan sus deberes y derechos para poder hablar en el mismo idioma y que tengan confianza en la aplicación de la justicia.

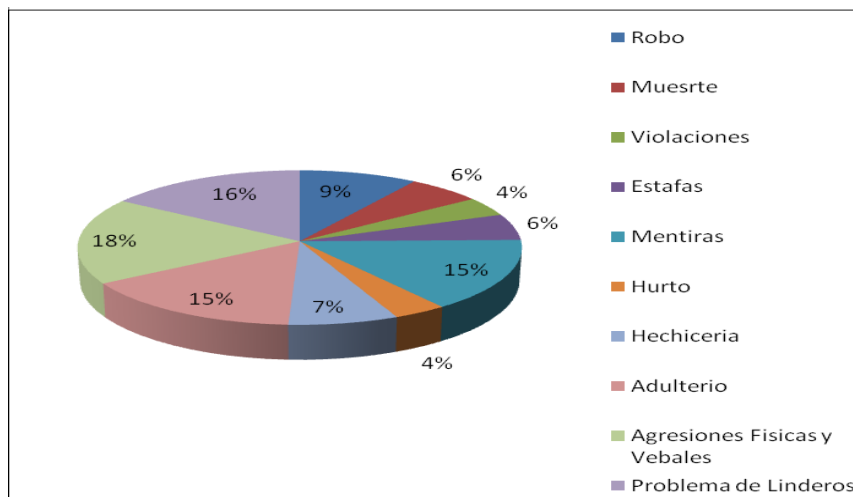
4. Qué delitos debería juzgar las autoridades indígenas?

CUADRO N° 4

	# ENCUESTAS	%
Robo	49	12,37
Muerte	31	7,83
Violaciones	21	5,30
Estafas	29	7,32
Mentiras	79	19,95
Hurto	19	4,80
Hechicería	39	9,85
Adulterio	81	20,45
Agresiones Físicas y Verbales	95	23,99
Problema de Linderos	83	20,96
TOTAL	396	100

Muestra: 396

GRAFICO N° 4



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 4

De las ciento cincuenta y seis encuestas aplicadas a las diferentes Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, en lo referente a la pregunta planteada se ha podido obtener la siguiente información sobre los delitos que debe conocer y solucionar las Autoridades de las Comunidades Indígenas Agresiones Físicas y Verbales 23.99%, Problemas de linderos 20.96%, Adulterio 20.45%, Mentiras

19.95%, Robo 12.37%, Hechicería 9.85%, Muerte 7.83%, Estafas 7.32%, Violaciones 5.30% y Hurto 4.80%.

Por los resultados logrados se puede determinar que las Comunidades Indígenas tienen el poder de solución al cometimiento de los delitos dentro de su jurisdicción de acuerdo a la aplicación de la Justicia Indígena, sin que sea necesario la intervención del Fiscal de asuntos Indígenas, ya que los delitos mas graves considerados por la justicia ordinaria que tienen menor porcentaje en esta exposición, se debe poner en conocimiento de la Fiscalía de asuntos Indígenas para su tramite ante las autoridades pertinentes.

Entre los delitos más graves considerados por las comunidades indígenas, encontramos el adulterio, agresiones físicas y verbales; y, problemas de linderos, los mismos que no son aceptados dentro de las comunidades indígenas, porque estarían violando sus costumbres ancestrales de convivir en paz y armonía.

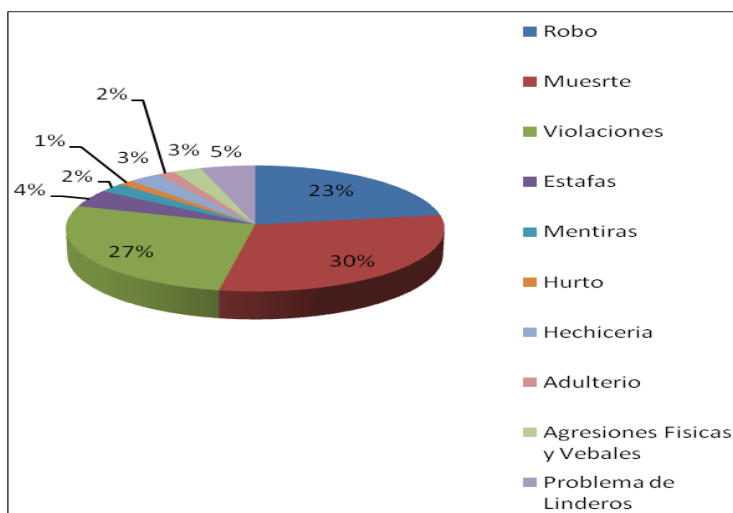
5.- Qué delitos se debería poner en conocimiento del Fiscal de asuntos Indígenas?

CUADRO N° 5

	# ENCUESTAS	%
Robo	86	22,51
Muerte	116	30,37
Violaciones	103	26,96
Estafas	17	4,45
Mentiras	9	2,36
Hurto	5	1,31
Hechicería	11	2,88
Adulterio	6	1,57
Agresiones Físicas y Verbales	10	2,62
Problema de Linderos	19	4,97
TOTAL	382	

Muestra: 382

GRAFICO N° 5



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 5

De las ciento cincuenta y seis encuestas aplicadas a las diferentes Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, en lo referente a la pregunta planteada se

ha podido obtener la siguiente información sobre que delitos debería conocer la Fiscalía de asuntos Indígenas tenemos Muerte 30.37%, Violaciones 26.96%, Robo 22.51%, Problemas de linderos 4.97%, Estafas 4.45%, Hechicería 2.88%, Agresiones Físicas y Verbales 2.62%, Mentiras 2.36%, Adulterio 1.57%, y Hurto 1.31%.

Por los resultados obtenidos se puede determinar que las Comunidades Indígenas por la gravedad de los delitos cometidos y a fin de que la justicia sea imparcial y se aplique en forma justa, han manifestado de acuerdo al porcentaje expuesto, los delitos que deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía de asuntos Indígenas, a fin de se solucionen de manera oportuna y respetando los principios de respeto a los derechos de las personas y a una justicia eficaz ya que al ser juzgados por las Comunidades Indígenas se puede poner en riesgo un juzgamiento justo y se pueda sancionar a personas inocentes y poner en libertad a culpables de un delito por falta de una correcta aplicación de las etapas procesales.

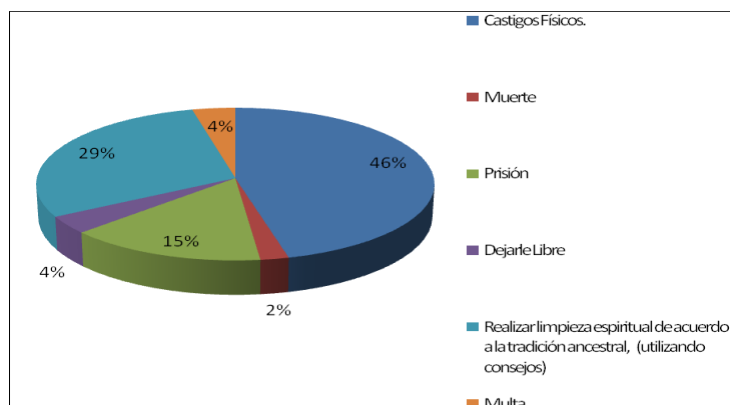
6.-Cuál es la sanción que se debería imponer a quién comete un delito dentro de una Comunidad Indígena?

CUADRO N° 6

	# ENCUESTAS	%
Castigos Físicos.	86	45,99
Muerte	4	2,14
Prisión	28	14,97
Dejarle Libre	7	3,74
Realizar limpieza espiritual de acuerdo a la tradición ancestral, (utilizando consejos)	55	29,41
Multa	7	3,74
TOTAL	187	

Muestra: 187

GRAFICO N° 6



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 6

De las ciento cincuenta y seis encuestas aplicadas a las diferentes Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, en lo referente a la pregunta planteada se ha podido obtener la siguiente información sobre cuál es la sanción que se debería imponer a quién comete un delito dentro de una Comunidad Indígena tenemos Castigos Físicos 45.99%, Realizar limpieza espiritual de acuerdo a la tradición

ancestral, (utilizando consejos) 29.41, Prisión 14,97 %, Dejarle Libre 3,74%, Multa 3,74% y Muerte 2,14%.

La mayor parte de encuestados manifiestan que se debe sancionar con castigos físicos a fin de que quién cometió estos delitos tomen escarmiento y no lo vuelvan a cometer y cambien su estilo de vida, mientras tanto de acuerdo al siguiente porcentaje en orden descendente, manifiestan que se debe realizar una limpieza espiritual, a fin de corregir la actitud de la persona y darle oportunidad a cambie su vida y sea una persona digna de pertenecer a una Comunidad Indígena.

Mientras otra parte de los encuestados, se han decidió por que se debería darles prisión a quien comete estos delitos para que reciban un escarmiento ejemplizador para los demás y las Comunidades Indígenas tengan como miembros a personas dignas y de buen ejemplo para los demás.

Continuando con el orden de los resultados, se puede detectar que el mismo porcentaje de encuestados manifiestan que se debe dejar libre después de que sean aconsejados y prometan su cambio y de igual manera que paguen una multa y sean puestos en libertad.

Pero un mínimo de encuestados desearían que se sancione con la muerte a quien comete un delito grave y de esta manera obtener una sociedad libre de delincuencia y que todo sea como en los tiempos contemporáneos que existía personas respetuosos de la vida de los demás y existía confianza entre todos.

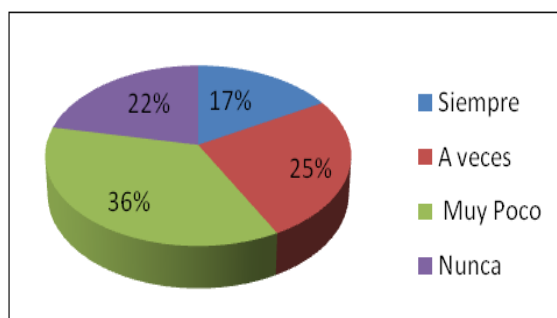
7.- Acude usted a la Fiscalía de asuntos Indígenas para denunciar un delito?

CUADRO N° 7

	# ENCUESTAS	%
Siempre	26	16,67
A veces	40	25,64
Muy Poco	56	35,90
Nunca	34	21,79
TOTAL	156	

Muestra: 156

GRAFICO N° 7



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 7

De las ciento cincuenta y seis encuestas aplicadas a las diferentes Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, en lo referente a la pregunta planteada se ha podido obtener la siguiente información sobre si acude usted a la Fiscalía de asuntos Indígenas para denunciar un delito tenemos Muy Poco 36%, a Veces 25%, Nunca 22% y Siempre 17%.

De las respuestas obtenidas podemos colegir que las Comunidades Indígenas acuden muy poco a denunciar los delitos en la Fiscalía de asuntos Indígenas, ya que temen que los procesos se demoren mucho y no se tengan resultados o que se olviden de los mismos, teniendo una desconfianza en la aplicación de la justicia, optando por solucionar sus problemas legales dentro de la misma comunidad, aplicando la Justicia Indígena por la celeridad en la solución de conflictos legales.

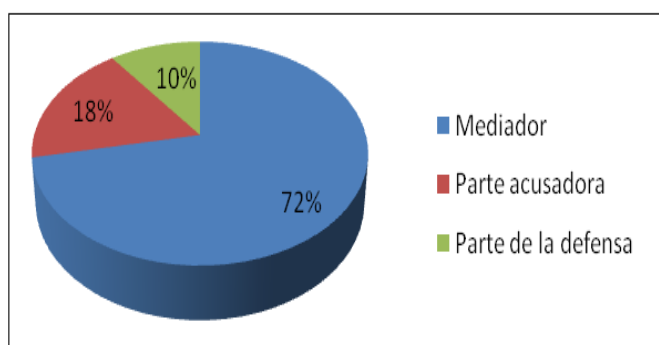
8.- Cómo debería intervenir la Fiscalía de asuntos Indígenas en el proceso de juzgamiento de un delito cometido dentro de la Comunidad Indígena?

CUADRO N° 8

	# ENCUESTAS	%
Mediador	112	71,79
Parte acusadora	28	17,95
Parte de la defensa	16	10,26
TOTAL	156	100

Muestra: 156

GRAFICO N° 8



Fuente: Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 8

De las encuestas aplicadas en las Comunidades Indígenas de la Provincia de Cotopaxi, se puede establecer cómo debe intervenir el Fiscal de asuntos Indígenas en la solución de conflictos: Mediador 72%, Parte Acusadora 18% y Parte de la defensa 10%.

De la información recopilada podemos enunciar que las Comunidades Indígenas sugieren que el Fiscal, actúe como mediador en la solución de los problemas, sea

considerado como un Juez de Paz y se dé solución a los conflictos, aplicando justicia con equidad e imparcialidad, creando confianza en las Autoridades.

Con los resultados obtenidos, se han alcanzado los objetivos propuestos, los mismos que están relacionados con las preguntas científicas planteadas en el proyecto de investigación.

2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Se puede concluir que, la mayoría de los encuestados esta de acuerdo que cuando se comete un delito dentro de una Comunidad Indígena debe ser puesto en conocimiento y juzgado por Autoridades Indígenas, basándose principalmente al Derecho Consuetudinario, ya que su juzgamiento debe ser de acuerdo a sus culturas y tradiciones.
- Se observó un leve conocimiento de las atribuciones que tiene la Fiscalía de asuntos Indígenas como autoridad, haciéndose necesario realizar una difusión en todas las Comunidades las funciones y responsabilidades que cumple el Fiscal.
- Es fundamental realizar una campaña de difusión en todos los niveles de las Comunidades Indígenas sobre las funciones que tiene la Fiscalía de asuntos Indígenas como Autoridad Indígena y que todos conozcan sus deberes y derechos para poder hablar en el mismo idioma y que tengan confianza en la aplicación de la justicia.
- Las Comunidades Indígenas tienen el poder de dar solución al cometimiento de los delitos dentro de su jurisdicción, aplicando la Justicia Indígena. De acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos, es necesario la intervención del Fiscal de asuntos Indígenas para su trámite ante las autoridades pertinentes.
- Según las Comunidades, se debe sancionar con castigos físicos, en razón de quién cometió estos delitos tome escarmiento y no vuelva a cometer, cambie su estilo de vida; realizando una limpieza espiritual, corrigiendo la actitud de la persona y sea una persona digna de pertenecer a una Comunidad Indígena respetando los Derechos de las Personas y aplicando una justicia eficaz ya que

al ser juzgados por las Comunidades Indígenas se puede poner en riesgo un juzgamiento justo y se pueda sancionar a personas inocentes y poner en libertad a culpables de un delito por falta de una correcta aplicación de las etapas procesales.

- Los miembros de las Comunidades Indígenas acuden muy poco a denunciar los delitos en la Fiscalía de asuntos Indígenas ya que temen que los procesos se demoren mucho y no se realice la investigación pertinente por el Fiscal, teniendo una desconfianza en la aplicación de la justicia, por lo que han optado por solucionar sus problemas legales dentro de la misma comunidad aplicando la Justicia Indígena por la celeridad en la solución de los conflictos legales.
- El Fiscal de asuntos Indígenas, Comisarios y Jefes Políticos, podrán actuar en la solución de problemas como Jueces de Paz o Mediadores, siempre y cuando sean personas indígenas, interviniendo en la solución de conflictos y verificando que la justicia se aplique con equidad e imparcialidad y de esta manera tener la suficiente confianza en las Autoridades que juzguen los delitos.

RECOMENDACIONES

- Es necesario que la Fiscalía General del Estado, en consenso con las autoridades de Justicia, establezcan Directrices de las atribuciones específicas que debe cumplir el Fiscal de asuntos Indígenas, las mismas que estarán inmersas en las funciones de mediador de los conflictos que surgen en las comunidades indígenas, respetando costumbres y tradiciones de cada comunidad.
- Solucionar los diferentes conflictos en el menor tiempo posible, a fin de cumplir con el principio de celeridad de un proceso, enmarcado en el respeto de los Derechos Humanos.
- Las autoridades indígenas correspondientes, al aplicar las sanciones, deberán tomar en cuenta el bienestar de la familia de las partes involucradas.
- La sanción impuesta debe estar de acuerdo a sus costumbres y tradiciones; y, según la gravedad del delito cometido, sea juzgado por Autoridades de la propia comunidad o seguir con el trámite pertinente ante autoridades de la Justicia Ordinaria.
- El Fiscal de asuntos Indígenas debe ser un capacitador y promotor del respeto a los Derechos Humanos, difundiendo los procedimientos que se debe seguir para denunciar los delitos; y, que los integrantes de la Comunidad Indígena no duden en acudir a la Fiscalía de asuntos Indígenas a solicitar su intervención para investigar y solucionar los conflictos presentados.
- En el cometimiento de un delito por parte de indígenas fuera de su territorio, las Autoridades Indígenas, podrán solicitar avocar conocimiento y juzgar de acuerdo a sus propias leyes; debiendo, las autoridades de Justicia Ordinaria declinar su competencia y archivar la causa de acuerdo a lo establecido en el Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial.

CAPÍTULO III

3.1. PROPUESTA

DISEÑO DE DIRECTRICES DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL FISCAL DE ASUNTOS INDIGENAS COMO PARTE DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI CON SEDE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.

3.2 OBJETIVO GENERAL

Determinar las Atribuciones Específicas que debe cumplir el Fiscal de asuntos Indígenas, basándose en directrices a seguir mediante un Manual de Funciones, a fin de establecer la responsabilidad por quienes han cometido delitos dentro de una Comunidad Indígena, observando que se ejerza justicia en forma ecuaníme respetando las costumbres y tradiciones de cada Comunidad.

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar un Manual de Funciones mediante directrices para el establecimiento de las atribuciones específicas que debe cumplir el Fiscal de asuntos Indígenas frente a los delitos que se comenten en las Comunidades Indígenas.

Difundir por parte del Fiscal de asuntos Indígenas a las autoridades de las comunidades, el rol que cumplirá en la solución de conflictos ocasionados por delitos cometidos dentro de una comunidad indígena, los cuales estarán dirigidos hacia el respeto de los Derechos Humanos, costumbres y tradiciones.

3.4 JUSTIFICACION

En vista que se han observado una serie de linchamientos y ajusticiamientos, que no necesariamente constituyen administración de justicia indígena, es necesario clarificar y diferenciar la justicia indígena, de los linchamientos, de la justicia por mano propia, de la justicia de paz, de la mediación; y esclarecer el rol que debe cumplir el Fiscal de asuntos Indígenas.

Para determinar estas atribuciones se debe analizar el derecho de autonomía de las colectividades indígenas en el contexto de la plurinacionalidad; revisando la administración de justicia indígena; es necesario diseñar directrices para las atribuciones específicas que debe cumplir el Fiscal de asuntos Indígenas como parte de la Fiscalía Provincial.

3.5. FUNDAMENTACION TEÓRICA

La Constitución del 2008 declaró al Ecuador como un Estado plurinacional e Intercultural.

Una de las consecuencias fundamentales de esa declaratoria es que el Estado reconoce a todas las diversidades como sujetos de derechos. Entre esas diversidades se encuentran las siguientes colectividades indígenas:

Nacionalidades indígenas, son colectividades que guardan una identidad histórica, idioma, cultura; que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y bajo el ejercicio de su propia autoridad

En el Ecuador, existen 13 nacionalidades indígenas: Awa, Chachi, Epera, Tsa'chila, Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Wuaorani, A'íconfán, Shiwiar, Zápara y Kichwa, las 4 primeras están en la costa, las 8 siguientes en la amazonia y la última en la sierra.

Pueblos indígenas, son colectividades con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidas por sus propias formas de organización, social, política, económica y jurídica, forman parte de una nacionalidad, por ejemplo al interior de la nacionalidad Kichwa, conviven los siguientes pueblos indígenas: Karanki, Natabuela, Otavalo, Cayambe, Kitu Kara, Panzaleo, Chibuleo, Salazaka, Waranka, Puruhua, Kañari, Saraguros y todos estos pueblos hablan el idioma kichwa.

Comuna indígena, es una forma nuclear de organización socio política tradicional de las nacionalidades y pueblos indígenas. Se denomina también ayllus o centros, es el espacio en donde se ejerce el gobierno comunitario a través de asambleas generales. Es decir, el espacio en donde se decide la organización social, económica, política y jurídica, en donde se ejercen las facultades legislativas y la administración de justicia.

Comuna indígena, es sinónimo de comunidad indígena. La denominación de comuna, fue adoptado al interior del mundo indígena, a raíz de la vigencia de la Ley de Comunas dictada en 1937 y por exigencia de las instituciones del Estado para acceder a ciertos beneficios, los ayllus se fueron constituyendo en comunas jurídicas, pero, aunque se adoptó el nombre de Comuna y se elaboró los reglamentos, eso es utilizado solo para trámites en instituciones, y en la realidad funciona como gobierno comunitario, que poco a poco va cambiando hacia la denominación de comunidad o gobierno comunitario.

Estas colectividades indígenas, en el Estado plurinacional, por un lado, gozan de derechos humanos, entre ellas el derecho a la autonomía interna; y, por otro lado, todas las culturas están en construcción, es decir, no existe culturas superiores e inferiores, ni administración de justicia inferior o superior, en consecuencia todas son iguales y merecen el mismo respeto.

En ese contexto, se instituye la interculturalidad como un mecanismo que intenta viabilizar la plurinacionalidad, cuyo objetivo es alcanzar la unidad en la

diversidad, bajo los principios del respeto e impidiendo todo tipo de discriminación y marginación.

La autonomía interna es la capacidad de las colectividades para decidir libre y responsablemente su futuro no solo desde un punto de vista político, sino también económico, social y cultural

La declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT reconocen de manera expresa el derecho a la libre determinación o autodeterminación.

El derecho a la autonomía interna de las colectividades indígenas es la base o sustento para la garantía de otros derechos como: el territorio; consulta previa, libre e informada; manejo y administración de los recursos naturales; educación intercultural bilingüe; salud indígena; administración de justicia indígena.

3.5.1 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La Constitución de la República del Ecuador vigente, en su artículo 171, ratifica lo ya reconocido en 1998, esto es, el pluralismo jurídico que, a diferencia del monismo legal, permite hablar de la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. En términos genéricos se llama sistema jurídico o derecho a los sistemas de normas, instituciones, autoridades y procedimientos que permiten regular la vida social y resolver conflictos. También incluye normas que establecen como se crean o cambian las normas, los procedimientos, las instituciones y autoridades.

Autoridades legitimadas para ejercer las facultades jurisdiccionales, cuando la Constitución concede facultades para ejercer funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, se refiere a las autoridades, que según las normas internas de cada uno de esas colectividades, tienen potestad para resolver los conflictos.

Dichas autoridades, son designadas por cada una de las colectividades indígenas, en ejercicio de su autonomía interna y aplicando su derecho propio. Por eso debemos tener claro, que los fiscales indígenas son nombrados por el Ministerio Público, por tanto, ni siquiera debería llamarse fiscales indígenas, porque no forman parte de la justicia indígena, sino de un organismo estatal, y en lugar de ser mestizo es indígena eso y nada más, porque el poder viene del nombramiento que le extiende el Ministerio Público. En cambio el poder de la autoridad indígena viene de la comunidad o pueblo indígena. De tal manera que, cada comunidad, pueblo y nacionalidad indígena en ejercicio de su derecho a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria.

La autonomía interna, decide la autoridad que resolverá los conflictos internos, cualquiera que sea el caso sin importar la especialidad. En unos casos, son los cabildos, asambleas generales de la comunidad o comunidades, en otros casos los shamanes, o el líder de alta aceptación por su honestidad y ejemplo, o una persona o comisión específica electa por la Asamblea. En conflictos familiares y conyugales, cumplen la función de autoridades los padres, los padrinos y hermanos mayores.

La autoridad indígena que administra justicia, debe ser reconocida por todos los miembros de la comunidad, de tal manera que, cuando hay un conflicto saben a

dónde recurrir y esa autoridad conoce el procedimiento interno para resolver el conflicto.

La competencia de las autoridades indígenas no se reduce a los conflictos que se producen en los territorios de las colectividades indígenas:

- a) Competencia material, debemos tener presente que en el Derecho Indígena no existe la división del derecho por materias, conocido en el derecho anglosajón. En esa perspectiva, ni el Art. 171 u otra norma de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, ni el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, tampoco la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, no limitan a la jurisdicción indígena el conocimiento de alguna materia. Consecuentemente, pueden conocer toda clase de conflictos o materias conocidas desde el derecho anglosajón (civiles, penales, laborales, etc.).
- b) Competencia territorial, desde algunos sectores, inclusive de algunos dirigentes y asesores de las organizaciones indígenas, han pretendido que la competencia de la jurisdicción indígena se reduzca al ámbito territorial.

Dicha posición debe ser considerada no válida, porque un conflicto surgido entre dos miembros de las comunidades fuera del territorio de la colectividad indígena, no podrá ser conocido por la autoridad indígena, debido a que mencionadas autoridades ejercerán funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, pero esto no limita a conocer y resolver los conflictos surgidos fuera de su ámbito.

Por tal razón no se podría limitar la competencia indígena para conocer y resolver un conflicto surgido entre indígenas fuera de su jurisdicción territorial.

Además, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, no limitan la competencia de las

autoridades de los pueblos indígenas a los conflictos surgidos fuera del territorio indígena.

- c) Competencia personal o pertenencia étnica, los Derechos Indígenas están destinados a la regulación ordinaria de la vida social y la vida interna de los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros como partes del derecho a la propia vida cultural, en este sentido debe tenerse en cuenta, que es fundamental la pertenencia étnica para determinar la competencia de la autoridad indígena, pero sin que sea exclusivo. Las colectividades indígenas, básicamente determinan como miembro de esa colectividad: por la auto identificación de la persona como miembro o parte de una colectividad indígena; y que esa colectividad le considere como miembro. Las comunidades indígenas generalmente lo consideran miembro a las personas que participan activamente en la vida comunitaria: como mingas, reuniones, aportes económicos e intelectuales y actos sociales.

Normas, procedimientos propios y facultades legislativas de las colectividades indígenas. Las autoridades de las colectividades indígenas, de acuerdo al mandato constitucional, ejercerán funciones jurisdiccionales aplicando normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos. Por tanto, las autoridades de los pueblos indígenas, no están sometidas a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, para la resolución de conflictos internos, sino su Derecho Propio. Estas normas y procedimientos propios o Derecho Propio, no necesariamente están escritas, lo fundamental es que sean aceptadas y conocidas por sus miembros y sus autoridades; sin embargo, en caso de que las autoridades sancionen aplicando normas y procedimientos no reconocidos y aceptados por los miembros de la comunidad, estaríamos frente a una arbitrariedad, que debe ser juzgada.

Pero la norma constitucional, al referirse a las normas y procedimientos, no solo está reconociendo a las normas actualmente vigentes en cada una de las colectividades indígenas, sino además está reconociendo y concediendo a cada

una de las colectividades la potestad legislativa específica para producir normas, ya sea creando o modificando, a fin de regular su vida social y organizar el orden comunitario interno.

El reconocimiento de esta facultad legislativa a favor de las colectividades indígenas es expreso en el Art. 57, Num.10 de la Constitución vigente, que dice: ***“Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.***

Los derechos humanos garantizados en la Constitución y convenios internacionales debidamente ratificados por el Ecuador, que deben ser observados por la autoridad indígena, que pueden producir tensiones entre la facultad de administrar justicia indígena, a través de sus propias autoridades, aplicando normas y procedimientos propios, especialmente en la aplicación de las sanaciones o curaciones, por un lado, y el derecho estatal que tiene que aplicar el Derecho germánico romano. Frente a esa tensión, es necesario que se conozca los principios que rige el derecho indígena y sus características, base de la cual debe partir cualquier interpretación.

En razón de esa facultad legislativa, cada una de las colectividades indígenas de manera autónoma creará y reformarán sus normas y procedimientos internos. La facultad de conocer, investigar, resolver y ejecutar las resoluciones (elementos de la jurisdicción indígena), la jurisdicción indígena tiene sus propios procedimientos, que difieren del sistema positivo y con el único propósito didáctico, sin avalar que sea la única, citamos las etapas de un procedimiento comunitario:

- a) Willachina o willana (demanda o aviso);
- b) Tapuykuna o tapuna (Averiguación o investigación del conflicto);
- c) Chimbapurana o wahuichina o ñawinchi (Confrontación entre el acusado y el acusador);

- d) Killpichirina (Resolución);
- e) Paktachina (Ejecución de la resolución).

3.5.2 LINCHAMIENTO, JUSTICIA POR MANO PROPIA, MEDIACIÓN Y JUSTICIA DE PAZ, NO CONSTITUYEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA.

Los linchamientos y justicia por mano propia no son justicia indígena, porque:

- a) No existen autoridades legitimadas, sino una muchedumbre enardecida que actúa por pasiones de ira, impotencia u otras;
- b) tampoco existen normas y procedimientos, sino un acto de masa, por ello se llega a consecuencias impredecibles.

Además, los linchamientos y justicia por mano propia, no necesariamente se dan en comunidades indígenas, sino en el sector urbano y rural no indígena, por ejemplo es muy común leer rótulos en barrios residenciales de Quito “ladrón cogido será escarmentado” o “ladrón cogido será quemado” y otros parecidos.

De igual forma, la mediación no es justicia indígena. Porque la mediación es uno de los procedimientos alternativos de solución de conflictos, al cual recurren las partes de manera voluntaria (Art. 190 de la Constitución); mientras que la administración de justicia indígena es obligatoria para los miembros de las colectividades indígenas.

En estricto sentido, la justicia de paz también es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, cuyo fundamento es la equidad, aunque la actual Constitución le da otras atribuciones obligatorias, como los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones que sean sometidos (Art. 189 de la Constitución). Obviamente el límite de la justicia de paz son los conflictos de las colectividades indígenas, excepto que la colectividad, de manera autónoma, decida lo contrario.

3.5.3 FISCALES DE ASUNTOS INDÍGENAS

Los Fiscales de asuntos Indígenas forman parte de la Fiscalía General del Estado, es decir de los organismos autónomos de la Función Judicial. Y la Fiscalía *“dirige, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal... De hallarse mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”* (Art. 195 de la Constitución).

En consecuencia, las Fiscalías de asuntos Indígenas:

- No forman parte del sistema de justicia indígena;
- Estas autoridades deberán ser indígenas;
- En el derecho indígena, no existe el derecho, ni juicio penal;
- La Fiscalía de asuntos Indígenas, es una figura de colonización o neo colonización de la justicia ordinaria a la justicia indígena, que pretende deslegitimar a esta última, que obviamente es contrario al principio de plurinacionalidad e interculturalidad, es decir, al principio de igualdad de culturas.

3.5.4 LA JUSTICIA INDÍGENA

El Título VIII de la Constitución Política de 1998, trata sobre la Función Judicial y en el último inciso del Art. 191 se dice expresamente *"Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional"*.

Al analizar este enunciado, se puede determinar que este principio, ha sido claramente ratificado en el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador promulgada el 20 de octubre del 2008, que se encuentra en vigencia.

3.5.5 POR QUE EXISTE LA JUSTICIA INDÍGENA

La plena vigencia de los derechos fundamentales constitucionales en los territorios indígenas, como límite al principio de diversidad étnica y constitucional es acogido en el plano del derecho internacional, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos, como Código Universal de convivencia y diálogo entre las culturas y naciones, presupuesto de la paz, de la Justicia, de la libertad, y de la prosperidad de todos los pueblos, así lo señala el Art. 8 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el mismo que se encuentra aprobado por el Ecuador.

Así tenemos que el Art. 8 en su numeral 1º dice "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario".

El numeral 2º señala "Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio".

Tenemos igualmente el Art. 9 que en su numeral 1º indica "En la medida en que en ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros".

De este modo podemos concluir que existe la justicia indígena hoy en nuestro país, porque el estado Ecuatoriano reconoce los principios de pluralismo político y de diversidad étnica y cultural de nuestra nación, como lo determina el Art. 1 de la Constitución vigente.

El convenio 169 de la OIT del año de 1988 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes señala al respecto: *"Las comunidades indígenas no se equiparan jurídicamente a una simple asociación. Son una realidad histórica, dinámica, caracterizada por elementos objetivos y subjetivos que no se reducen al Animus Societatis propio de las asociaciones civiles. Se nace indígena y se pertenece a una cultura, que se conserva o está en proceso de recuperación.*

La pertenencia a una comunidad indígena no surge de un acto espontáneo de la voluntad de dos o más personas. La conciencia de una identidad indígena o trivial es un criterio fundamental para la determinación de cuando se está ante una comunidad indígena, de suerte que la mera intención de asociarse no genera este tipo de colectividad".

Respecto de las decisiones de la comunidad que afectan a uno de sus integrantes, no existen medios de defensa judicial.

3.5.6 PROBLEMAS CON LA JUSTICIA INDÍGENA

Se ha manifestado en la República del Ecuador, que la creación de una jurisdicción especial indígena plantea el problema de determinar, cual es la jerarquía existente entre la ley y las costumbres y usos indígenas como fuentes de derecho y si bien se señala que deben ser de conformidad con sus propias normas y procedimientos está supeditada a la condición de que estos y aquellas que no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Las diferencias conceptuales y los conflictos valorativos que puedan presentarse en la aplicación práctica de órdenes jurídicos diversos, deben ser superados respetando mínimamente las siguientes reglas de interpretación:

- a) A mayor conservación de sus usos y costumbres mayor autonomía.
- b) Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares.
- c) Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural.

3.5.7 QUE IMPLICA LA JUSTICIA INDÍGENA

En el Art. 191 de la Constitución Política del Ecuador de 1998, reconoce la autonomía jurídica a las comunidades indígenas quienes deben aplicar normas y procedimientos propios, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a las leyes; así como lo ratifica el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador vigente. Debiendo ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados en la Constitución y la ley, pues solo de esta manera aseguraremos la unidad nacional, sin desconocer la existencia de una autonomía dentro de su territorio en la administración de justicia, lo que se traduciría en la elección de sus propias autoridades, las que pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y con las limitaciones señaladas.

De lo anotado se deduce, que la justicia indígena, no significa otra cosa que el reconocimiento y la realización parcial del principio de democracia participativa, pluralista y el respeto de la diversidad étnica y cultural de la nación ecuatoriana.

3.6 MANUAL DE ATRIBUCIONES DE LA FISCALIA INDIGENA

PRESENTACION

El Manual de Organización y Atribuciones es un documento técnico normativo de la Gestión Institucional que describe la estructura, objetivos y funciones y precisa

las interrelaciones jerárquicas, funciones internas y externas, también determina la Estructura Orgánica y requisitos para ser nombrado como Fiscal.

MANUAL DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL FISCAL DE ASUNTOS INDIGENAS COMO PARTE DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI CON SEDE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.

1. Antecedentes:

El Código Orgánico de la Función Judicial (9 de Marzo de 2009)

Considerando:

Que, una normativa judicial integral, que tenga a las personas y colectividades como sujetos centrales de la actuación de las juezas, jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos y demás servidores y servidoras judiciales, y que además incorpore los estándares internacionales de derechos humanos y de Administración de Justicia, es una necesidad impostergable en el Ecuador para la construcción de una sociedad profundamente democrática;

Que, el cambio radical de la justicia es una de las demandas populares más importantes que llevó a las ecuatorianas y ecuatorianos a convocar a una Asamblea Constituyente el 15 de abril de 2007 a través de una consulta popular, y encomendar a las y los asambleístas electos el 30 de septiembre de 2007 la elaboración de una nueva Constitución;

Que, la nueva Constitución fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en referéndum el 28 de septiembre, proclamada oficialmente el 15 de octubre de 2008, y finalmente publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008;

Que, el artículo 1 de esta Constitución vigente establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que la actuación de servidoras y servidores de la justicia debe responder a los principios y disposiciones constitucionales como una garantía de los derechos, limitación del poder estatal y la realización de la justicia;

Que, el anhelo de todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos de una justicia al alcance de cualquier persona y colectividad, sin distinciones ni discriminación de ningún tipo, efectiva y eficiente, participativa, transparente; y garante de los derechos responde, de acuerdo a lo que mandan los artículos 11.2, 66.4, 177 y 181 de la Constitución vigente, al diseño sistémico de una Administración de Justicia que permita que las juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores, y demás servidores judiciales se dediquen únicamente al ejercicio de las competencias técnicas que le son propias, y permita que las labores administrativas, especialmente de la carrera judicial y el régimen disciplinario, sean asumidas por un organismo de gobierno único y distinto a los organismos integrantes de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura;

Que, es, además, indispensable que este nuevo diseño transformador permita romper las barreras económicas, sociales, culturales, generacionales, de género, geográficas y de todo tipo que hacen imposible el acceso a una justicia, efectiva, imparcial y expedita para la defensa de los derechos de toda persona o colectividad, de acuerdo a lo que establecen los artículos 75 y 76 de la Constitución de 2008; y, al mismo tiempo, garantice un régimen eficiente de carreras para las servidoras y servidores judiciales fundamentado en los principios de igualdad y no discriminación, y el ingreso, promoción y evaluación objetiva y permanente sobre la base de sus méritos, con el fin de ejercer la potestad de administrar justicia al servicio y en nombre del pueblo;

Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los

derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.1, 11.8, 84 y 85;

Que, las normas constitucionales mencionadas, a su vez, incorporan los estándares internacionales de derechos humanos y Administración de Justicia, determinados especialmente en Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José", el Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o "Protocolo de San Salvador", la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belem Do Para", la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; las declaraciones, resoluciones, sentencias observaciones e informes de los comités, cortes comisiones de los sistemas de protección internacional de derechos humanos; y las legislaciones comparadas;

Que, la actual Ley Orgánica de la Función Judicial, promulgada en el Registro Oficial 636 del 11 de septiembre de 1974, es absolutamente incompatible con las normas constitucionales y estándares internacionales de

derechos humanos y Administración de Justicia, y no responde a la realidad social del Ecuador del Siglo XXI;

Que, la disposición transitoria primera de la Constitución vigente establece que dentro de los ciento veinte días a partir de la vigencia de la nueva Constitución, el órgano legislativo aprobará, entre otras, las leyes que regulen la Función Judicial y el funcionamiento del Consejo de la Judicatura; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 17 del Régimen de Transición de la Constitución vigente y las normas contenidas en el Mandato Constituyente 23 para la conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, decidido por la Asamblea Constituyente el 25 de octubre, y promulgado en el Registro Oficial 458 del 31 de octubre de 2008.

ATRIBUCIONES DE LA FISCALIA DE ASUNTOS INDIGENAS

Las Fiscalías de asuntos Indígenas del País, estarán presididas por Fiscales indígenas quienes cumplirán y ejercerán sus funciones observando las normas Constitucionales, Convenios Internacionales, Declaración de los Derechos Humanos y la Ley Orgánica de la Función Judicial. Código Civil, Código Penal, Procedimiento Penal y otras Leyes ordinarias, como leyes de coordinación y cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción ordinaria; observando las siguientes funciones:

1. Conocerán todos los problemas internos que se suscitaren entre personas indígenas, tal como lo dispone el Artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos Humanos y el Código Orgánico de la Función Judicial.
2. Difundirá y socializará mediante comunicaciones escritas o en forma verbal, a las autoridades de las diferentes Comunidades u Organizaciones, Asociaciones, Iglesias Evangélicas, Mercados, Ferias libres de los Pueblos y

Nacionalidades Indígenas, la existencia, funciones, objetivos, misión y visión de las Fiscalías Indígenas, Derecho Indígena y la Administración de Justicia Indígena.

3. Organizará seminarios, conferencias, Fórum, con las autoridades civiles, militares, eclesiásticos, estudiantes, profesores, dirigentes, profesionales del Derecho, funcionarios de la función judicial (Fiscales, Jueces y Magistrados).
4. Coordinará con los Dirigentes de las Comunidades u Organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades, para la solución de los problemas y conflictos internos que se hayan presentado.
5. Solicitará mediante oficios a las autoridades de la justicia ordinaria la competencia conforme a las disposiciones Constitucionales en su art. 171, en concordancia con el artículo 345 del código orgánico de la función judicial o de oficio.
6. Garantizar que los miembros de los grupos indígenas gocen del principio de igualdad, en el acceso a la procuración de justicia.
7. Promover la plena efectividad de la procuración de justicia tanto para el acusado como para las víctimas del delito, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones.
8. Garantizar el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación tanto a hombres y mujeres de los grupos indígenas.
9. Velar porque no se emplee ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los integrantes de los grupos indígenas tanto de la víctima como del acusado.

10. Velar que en las acusaciones del ministerio público contra algún miembro de las etnias del Estado, se tomen en cuenta las costumbres de dichas comunidades.
11. Garantizar el derecho de los indígenas acusados por delitos del orden común, a ser asistido por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
12. Participar en los respectivos comités municipales de seguridad pública, consejos municipales de protección civil, y demás organismos, en los términos que establezcan las disposiciones legales aplicables.
13. Supervisar las actuaciones de las áreas que les estén adscritas, en materia de averiguaciones previas, investigaciones, consignaciones, seguridad pública y las que determine el Ministro de Justicia mediante acuerdo.
14. Atenderá al público en su idioma ancestral según los Pueblos y Nacionalidades e igualmente receptar las denuncias en su lengua de origen en concordancia a las disposiciones constitucionales e Instrumentos Internacionales y el Art. 42 del Código Procedimiento Penal, y, luego transcrita al idioma castellano.
15. Una vez receptada la denuncia o conocidos los conflictos internos de los Pueblos y Nacionalidades, enviar a las Autoridades Indígenas en concordancia del mandato Constitucional, que son Autoridades competentes para conocer y juzgar en calidad de Jueces Naturales.
16. Para la fase preparatoria de la investigación el Fiscal, coordinará con la Policía Judicial y con las Autoridades Indígenas, se trasladará al lugar de los hechos a fin de recabar las informaciones que ayuden a esclarecer lo denunciado así como también solicitará a las instituciones públicas y privadas la información requerida.

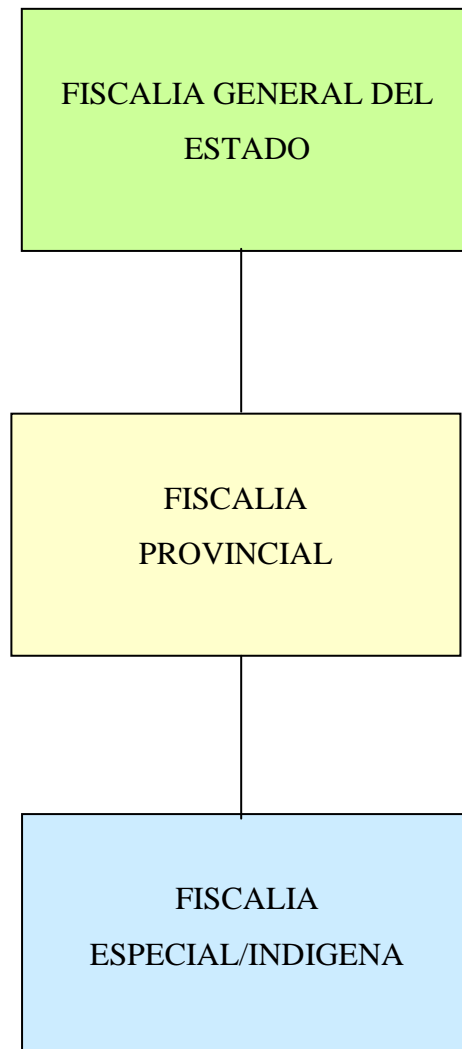
17. Concluida la investigación, el resultado de ésta enviará a las Autoridades de las Comunidades u Organizaciones de Pueblos y las Nacionalidades para que conozcan y resuelvan los conflictos internos de los miembros de su Comunidad u organización como Autoridades correspondientes conforme a las disposiciones constitucionales.
18. En el caso de que la parte denunciante por uno u otro motivo no continuare sustanciando la causa y existan meritos suficientes que el acto o la infracción no afecte ningún bien común o no cause malestar para la sociedad, unión familiar y la armonía de la comunidad u organización de los Pueblos y Nacionalidades, el Fiscal desestimaré la denuncia y ordenará el archivo de la misma, notificando el Secretario tal resolución a las autoridades indígenas de la comunidad u organización.
19. Conocerá la instrucción fiscal, cuando la causa se haya iniciado por delito flagrante ante un fiscal de lo penal ordinario, así como también las denuncias presentadas ante las comisaría de la policía nacional y de la mujer; que hayan sido remitidas a una de las Fiscalías Indígenas, ésta a su vez remitirá a las autoridades indígenas para que ellos resuelvan.
20. Conocerá las denuncias presentadas por parte de los miembros de los pueblos y nacionalidades en contra de las persona no indígenas, en este caso el fiscal indígena sustanciará el proceso de acuerdo al procedimiento ordinario. En el caso de que el denunciante no fuere indígena el fiscal sustanciará contra del infractor indígena conforme a las normas constitucionales e instrumentos internacionales, ya que debe ser juzgado de acuerdo a sus costumbres y tradiciones de los pueblos y nacionalidades a la que pertenece.
21. Conocerá las actas de juzgamiento y resoluciones de las autoridades indígenas, y Ejecutar mediante la Fuerza Pública lo resuelto por las autoridades de los Pueblos y Nacionalidades en caso de que así se requiera, por incumplimiento de las partes involucradas.

22. Conocerá las resoluciones de juzgamiento de las autoridades indígenas sobre las instrucciones fiscales iniciadas por delito flagrante ante un fiscal de lo penal ordinario, y que luego hayan sido remitidas a la Fiscalía de asuntos Indígenas y una vez resueltas por las autoridades de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en este caso el Fiscal de asuntos Indígenas oficiará al juez ordinario que conoce la causa la resolución de las autoridades indígenas y solicitará la inmediata liberación del detenido si fuere el caso, dejar sin efecto las medidas cautelares que haya dictado y el archivo de la causa, porque no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho según la Norma Constitucional vigente en el art 76 numeral 7 literal (i)
23. Emitirá boletas de auxilio, a favor de las denunciantes en caso de que la situación así lo amerite, a fin de proteger a las personas en peligro de sus vidas, tal como lo realiza los jueces de paz (comisarías de la policía nacional y comisarías de la mujer). Y ordenar las medidas cautelares respectivas de carácter real o personal con fines investigativos hasta que se esclarezca el hecho si las circunstancias así lo requieren.
24. El Fiscal de asuntos Indígenas, investigará el hecho denunciado hasta contar con elementos suficientes que le permitan comprobar la autoría o participación en el delito a persona o personas determinadas, y luego inmediatamente comunicará a las autoridades de las comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas a las que pertenece y puedan solucionar el mismo.
25. Asistirá a las audiencias de juzgamiento convocadas por las autoridades indígenas, las mismas que lo hará en coordinación con la Fiscalía de asuntos Indígenas; en dicha audiencia el Fiscal intervendrá y si es el caso acusará en su lengua materna.

26. El Fiscal de asuntos Indígenas, coordinará con las Autoridades de la comunidades, Pueblos y Nacionalidades a fin de que el día y la hora convocado para la audiencia, estén presentes las partes procesales, abogados patrocinadores y defensores, peritos y testigos así como también los padres y demás familiares de las partes quienes firmaran para constancia de lo resuelto.
27. Conocerá las denuncias o partes de aprehensión que se presenten en el Distrito y que tengan relación con casos de derechos colectivos en las cuales estén involucradas personas de comunidades indígenas.
28. Dirigirá e impulsará con el apoyo de la Policía Judicial la investigación pre procesal y procesal penal; dictar la resolución de inicio de la fase de indagación previa, de la etapa de instrucción fiscal e intervenir en las demás etapas del proceso penal; la iniciación de la instrucción fiscal se utilizará como recurso de última instancia, siempre y cuando no hayan resuelto las autoridades indígenas correspondientes.
29. Efectuará actos urgentes que en virtud de competencia fueren necesarios, además en los casos en que las Autoridades Indígenas le solicitaren debe el fiscal oficiar a la autoridad competente para que se deje sin efecto las medidas cautelares de carácter real o personal, luego de que el caso se haya resuelto de acuerdo a la Justicia Indígena.
30. Dirigirá y estará presente con la Policía Judicial en allanamientos, incautaciones, levantamientos de cadáveres y demás diligencias u operativos en que sea necesaria su presencia.
31. Informará sobre los servicios que ofrece el programa de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal si fuere evidente la existencia de riesgos inminentes para la seguridad del involucrado.

32. Ordenará que se realice por intermedio de los peritos calificados y acreditados por el Ministerio Público, las experticias correspondientes. Si no hubiere peritos habilitados para esta materia se procederá conforme a lo previsto en el art. 95 del Código de Procedimiento Penal, la Constitución y Convenios Internacionales.
33. Llevará a través de una base informática el registro y control de los procesos penales a fin de facilitar la identificación localización y estado de trámite.
34. Presentará informes sobre sus labores al Ministro Fiscal Distrital y Ministro Fiscal General de acuerdo con la Ley sus reglamentos.
35. Una vez juzgado el caso de acuerdo a la justicia indígena y cuando una de las partes incumpliera parcial o totalmente con las cláusulas estipuladas en la resolución de las Autoridades indígenas y luego de haber agotado todos los recursos para exigir su cumplimiento ordenará las medidas cautelares respectivas de carácter real o personal y excepcionalmente la prisión en los casos que así lo ameriten como autoridad de ejecución.
36. Las demás que le corresponde asumir de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, los Convenios Internacionales, Código de procedimiento Penal, Ley Orgánica de la Función Judicial y demás normativas e instrumentos nacionales e internacionales relacionados con el tema.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



LÍNEA DE DEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

La Fiscalía de asuntos Indígenas, dependerá directamente de la Fiscalía Provincial y esta a su vez de la Fiscalía General del Estado.

REQUISITOS PARA SER FISCAL

En la Carrera Fiscal las categorías se gradúan en orden ascendente, desde el número uno hasta el diez.

El ingreso a la carrera fiscal se hará a la categoría uno, de agente fiscal o fiscal de adolescentes infractores.

La designación de los representantes de la Fiscalía en cada sección territorial se realizará previo concurso en el cual tendrán derecho a intervenir los fiscales que se hallen por lo menos en la tercera categoría de la carrera.

REQUISITOS GENERALES.- Para ingresar a la Función Judicial se requiere:

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política;
2. Acreditar probidad, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el reglamento que dictará el Consejo de la Judicatura.

PERFILES.- La Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública coordinarán con el Consejo de la Judicatura la elaboración de los perfiles requeridos para el ingreso a las carreras fiscales y de defensoría.

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA INGRESAR A LAS CARRERAS JUDICIAL JURISDICCIONAL, FISCAL Y DE DEFENSORIA PÚBLICA.

Además de reunir los requisitos generales, la o el postulante a ingresar a las carreras judiciales jurisdiccional, fiscal y de defensoría pública, deberá ser abogada o abogado con título de tercer nivel legalmente reconocido, y presentará:

1. Certificado de calificaciones generales de carrera otorgado por la universidad en la que obtuvo el título;
2. Certificado de evaluación del periodo de práctica previa a la obtención del título de abogado otorgado por la institución en la que se lo realizó. Este requisito es válido para quienes hubieren obtenido su título con posterioridad a la expedición del reglamento que regula la práctica pre profesional obligatoria.
3. Relación escrita de las motivaciones por las cuales el postulante aspira a ingresar al servicio judicial. Esta relación se utilizará como uno de los elementos en las pruebas teóricas orales y psicológicas.
4. Declaración juramentada de no haber sido condenado por delitos de concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato.

INHABILIDADES.- No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial:

1. Quien se hallare en interdicción judicial, incluido el que haya realizado cesión de bienes o contra quien se haya iniciado juicio de concurso de acreedores o de quiebra, mientras no se rehabilite;
2. Quien hubiese sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista; en el caso de sentencias condenatorias por concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato, la inhabilidad será definitiva;
3. Quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto;

4. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de la profesión;
5. Quien desempeñare un cargo en el sector público o una representación por elección popular, con excepción de la docencia universitaria que podrá realizarse únicamente fuera de horario de trabajo;
6. Quien hubiere sido sancionado disciplinariamente con destitución del cargo, con resolución firme;
7. Quien fuere ministro de cualquier culto mientras se halle en ejercicio de su ministerio;
8. Quien se hallare incurso en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso al servicio civil en el sector público; y,
9. Quien se hallare comprendido dentro de las incompatibilidades por relación familiar.

INCOMPATIBILIDADES POR RELACION FAMILIAR.- No podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la Función Judicial:

1. Quien sea cónyuge, tenga unión de hecho o sea familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la autoridad nominadora o un miembro de ella si esta fuere colegiada; y,
2. Quien sea cónyuge, tenga unión de hecho o mantenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra servidora o servidor de la Función Judicial que preste sus servicios en la misma dependencia.

INCOMPATIBILIDAD SUPERVINIENTE.- Si a quien estuviere desempeñando legal e idóneamente el puesto o cargo, le alcanzare alguna de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, será trasladado a otra unidad donde no exista la incompatibilidad, en la misma categoría o con la misma remuneración.

BIBLIOGRAFIA

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (9 de Marzo de 2009)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (1998) Corporación de Estudios y Publicaciones Quito.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008). Corporación de Estudios y Publicaciones Quito.

CABEDO MALLOL, Vicente, y otros(2002) Análisis de las Constituciones Políticas Latinoamericanas. Regulación Constitucional del Derecho Indígena en Iberoamérica; en: Constituciones, Derecho y Justicia en los Pueblos Indígenas de América Latina. Pontificia Universidad Católica del Perú.

CONAIE (2002) Anteproyecto de Ley de Compatibilización y de Distribución en la Administración de Justicia Indígena.

ILAQUICHE, Raúl(2006) Pluralismo Jurídico y Administración de justicia indígena en el Ecuador. Segunda Edición. Quito – Ecuador.

LARREA, H. Juan(1984) Derecho Civil del Ecuador. Cuarta edición. Parte general y personas. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito.

LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (Responsabilidades de la Fiscalía Indígena)

OIT. Convenio 169.

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA

STAVENHAGEN, Rodolfo. Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina, Colegio de México, IIDH. Primera Edición, 1988.

TIBÁN, L. (2008) Manual de aplicación de la justicia indígena

CERDA, H. (1998) Los Elementos de la Investigación. Editorial el Búho, Bogotá.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2009) Folleto " Nueva Era" Editorial ediecuatorial.

HERRERA, L. (2002) Maestría en Gerencia de Proyecto Educativos y Sociales. Primera Edición. Quito.

LEIVA, F. (1980) Nociones de la metodológica. Editorial Ortiz. Segunda Edición. Quito.

LEIVA, F. (1980) Investigación Científica Editorial Ortiz. Quito.

TALLER DE GOBIERNOS LOCALES, AUTONOMÍAS, TERRITORIOS E INTERCULTURALIDAD IEE (2007) Quito

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Fiscalías Provinciales, Funciones [en línea] Ecuador. Marzo 2010 [ref. 11-03-2010]. Disponible: <http://www.fiscalia.gov.ec>

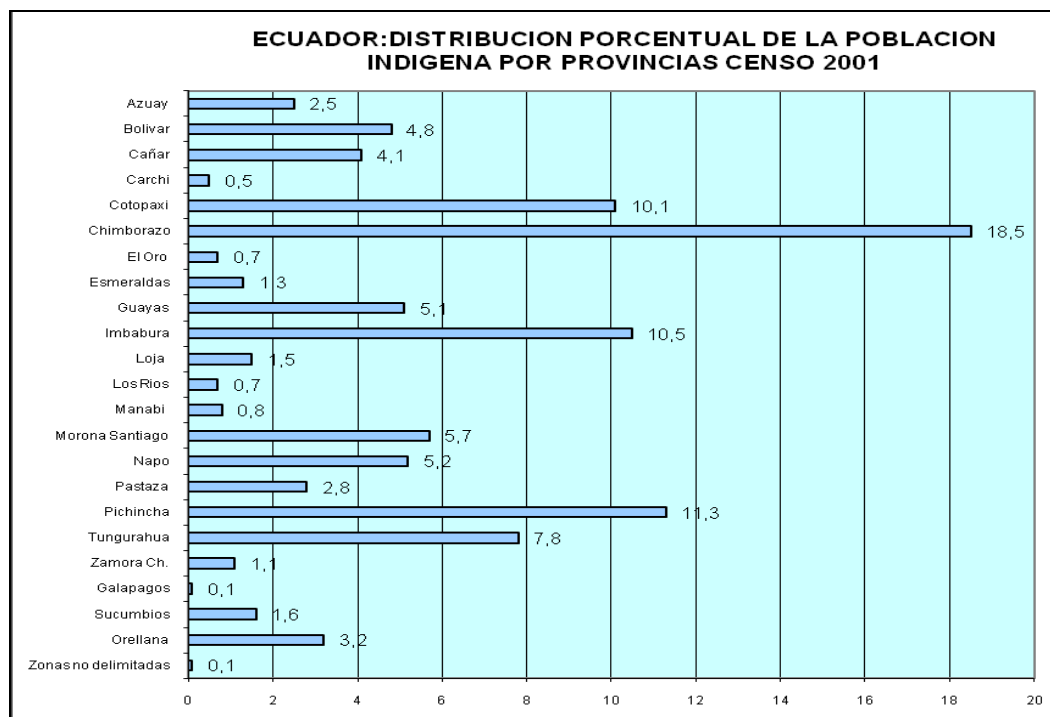
ECUADOR JUDICIAL. Código Orgánico de la Función Judicial. [en línea] Ecuador, Quito. Marzo 2009 [ref.10-03-2010]. Disponible: [www. Derecho Ecuador. com](http://www.DerechoEcuador.com)

ANEXOS

ANEXO “A”

ECUADOR: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION INDIGENA POR PROVINCIAS, CENSO 2001

PROVINCIAS	POBLACION	PORCENTAJE
Zonas no delimitadas	830	0,1
Orellana	26573	3,2
Sucumbíos	13287	1,6
Galápagos	830	0,1
Zamora Chinchipe	9135	1,1
Tungurahua	64773	7,8
Pichincha	93837	11,3
Pastaza	23252	2,8
Napo	43182	5,2
Morona Santiago	47334	5,7
Manabí	6643	0,8
Los Ríos	5813	0,7
Loja	12456	1,5
Imbabura	87194	10,5
Guayas	42351	5,1
Esmeraldas	10795	1,3
El Oro	5813	0,7
Chimborazo	153627	18,5
Cotopaxi	83872	10,1
Carchi	4152	0,5
Cañar	34047	4,1
Bolívar	39860	4,8
Azuay	20760	2,5
TOTAL	830418	100



Calculo de la muestra

$$n = N / E^2 (N-1) + 1$$

$$n = 83872 / (0.08)^2 (83872-1) + 1$$

$$n = 156$$

DISTRIBUCION DE ENCUESTAS EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGÚN EL PORCENTAJE DE POBLACION

CANTONES	% POBLACION	# ENCUESTAS	TOTAL ENCUESTAS ASIGNADAS
Latacunga	41.2	64	69
La Mana	9.2	14	0
Pangua	5.7	9	0
Pujilí	17.4	27	32
Salcedo	14.6	23	28
Saquisilí	6.0	10	14
Sigchos	5.9	9	13
TOTAL	100	156	156

Fuente: Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Elaborado por: Luis Aulestia

ANEXO “B”

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS SOBRE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA INDIGENA

- 1) Por quién considera usted, que debe ser aplicada la Justicia cuando se comete un delito dentro de una Comunidad Indígena?
 - a) Por Autoridades Indígenas
 - b) Por Jueces Competentes Ordinarios
 - c) Por el Comisario
 - d) Por el Intendente de Policía

- 2) Considera usted, que al ser detenido una persona por el cometimiento de un delito en una comunidad indígena se debe:
 - a) Castigarlo directamente.
 - b) Darle Oportunidad a que pruebe su inocencia.
 - c) Poner en conocimiento del Fiscal de asuntos Indígenas.
 - d) Exigir el pago por daños y perjuicios

- 3) Conoce usted, cuáles son las funciones de la Fiscalía de asuntos Indígenas?
 - a) Si, en su totalidad
 - b) Parcial
 - c) Poco
 - d) Nada

4) Que delitos debería juzgar las Autoridades Indígenas?

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| a) Robo, | f) Hurto |
| b) Muerte, | g) Hechicería |
| c) Violaciones | h) Adulterio |
| d) Estafas | i) Agresiones Físicas y Verbales |
| e) Mentiras | j) Problemas de Linderos |

5) Que delitos se debería poner en conocimiento del Fiscal de asuntos Indígenas?

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| a) Robo, | f) Hurto |
| b) Muerte, | g) Hechicería |
| c) Violaciones | h) Adulterio |
| d) Estafas | i) Agresiones Físicas y Verbales |
| e) Mentiras | j) Problemas de Linderos |

6)Cuál es la sanción que se debería imponer a quién comete un delito dentro de una Comunidad Indígena?

- a) Castigos Físicos.
- b) Muerte
- c) Prisión
- d) Dejarle Libre

- e) Realizar limpieza espiritual de acuerdo a la tradición ancestral, (utilizando consejos)
 - f) Multa
- 7) Acude usted a la Fiscalía de asuntos Indígenas para denunciar un delito?
- a) Siempre
 - b) A veces
 - c) Muy Poco
 - d) Nunca
- 8) Cómo debería intervenir la Fiscalía de asuntos Indígenas en el proceso de juzgamiento de un delito cometido dentro de la Comunidad Indígena?
- a) Mediador
 - b) Parte acusadora
 - c) Parte de la defensa.

ANEXO “C”
REGISTRO DE ENTREVISTA PARCIALMENTE ESTRUCTURADA

No. ENTREVISTADO: ENTREVISTADOR: LUGAR Y FECHA: OBJETO DE ESTUDIO:	
INTERPRETACION	INTERPRETACION VALORACION
1. Está de acuerdo con la forma de juzgamiento por los delitos cometidos por indígenas dentro de la Comunidad Indígena. ¿Por que?	
2. Considera usted que el procedimiento para el juzgamiento y aplicación de sanciones por el cometimiento de un delito dentro de una comunidad Indígena es el correcto. Ejemplo cuando existe asesinato, robo, abigeato, violación, bigamia. ¿Por que?	
3. Considera que existe una coordinación eficiente entre la Fiscalía de asuntos Indígenas y Autoridades Indígenas para el juzgamiento de un delito respetando el manual de justicia indígena y el procedimiento de las leyes ordinarias. ¿Por que?	

<p>4. Estaría de acuerdo que todos los delitos cometidos dentro de una comunidad indígena, la Fiscalía de asuntos Indígenas avoque conocimiento y proceda con la investigación y de ser necesario continúe con el procedimiento de acuerdo a la ley Ordinaria. ¿Por que?</p>	
<p>5. Una vez juzgado una persona por la Justicia Indígena, puede seguirse un proceso por daños y perjuicios. ¿Por que?</p>	